

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

CURSO ACADÉMICO 2020 / 2021

TÍTULO:

**EL ACOGIMIENTO: LA GRAN OPORTUNIDAD DE LOS
PEQUEÑOS DESAMPARADOS**

WORK TITLE:

**FOSTERING: THE GREAT OPPORTUNITY FOR THE LITTLE
HOMELESS**

AUTOR/A:

Carla Gutiérrez Álvarez

DIRECTOR/A:

Eva Vilar Cortabitarte

ÍNDICE:

1. Introducción.....	Pág 4
2. Consideraciones previas: La protección del menor.....	Pág 6
3. La situación de riesgo y desamparo.....	Pág 10
4. Evolución histórica de la figura del acogimiento.....	Pág 15
5. Modalidades de acogimiento.....	Pág 19
5.1. El acogimiento residencial.....	Pág 21
5.2. El acogimiento familiar.....	Pág 22
I. Acogimiento familiar permanente.....	Pág 24
II. Acogimiento familiar temporal.....	Pág 25
III. Acogimiento especializado o profesionalizado.....	Pág 26
IV. Acogimiento familiar de urgencia.....	Pág 28
V. Acogimiento familiar preadoptivo.....	Pág 29
5.3. El acogimiento internacional.....	Pág 31
6. La constitución de la figura del acogimiento.....	Pág 33
6.1. Las formas de constitución de la medida de acogimiento.....	Pág 37
I. La constitución administrativa.....	Pág 37
II. La constitución judicial.....	Pág 38
7. Extinción de la figura del acogimiento.....	Pág 39
8. La institución del acogimiento en Cantabria.....	Pág 42
9. Conclusión.....	Pág 44
10. Bibliografía.....	Pág 48

ABREVIATURAS

AP: Audiencia Provincial

Art.: Artículo

C.c: Código Civil

CCAA: Comunidad Autónoma

CE: Constitución Española

LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil

LOPJM: Ley Orgánica de Protección del Menor.

LO: Ley Orgánica.

MACI: Movimiento de Atención Cierta a la Infancia

MENAS: Menores Extranjeros No Acompañados

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial.

SSI: Servicios Sociales Internacionales

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

RESUMEN

El acogimiento es una figura esencial en materia de protección de menores desamparados, siempre hay que tener en cuenta que el menor es un sujeto de derecho vulnerable que va a necesitar de un apoyo que en la mayor parte de los casos es proporcionado por la propia familia biológica, en el momento en el que sea inexistente esa protección, actuará el estado proporcionando un acogimiento alternativo.

La figura del acogimiento ha ido evolucionando de manera paralela con la sociedad, se van a presentar diferentes modalidades de acogimiento teniendo en cuenta las circunstancias del caso, se valorará a los menores de forma independiente, de esta forma se les proveerá la medida de protección más efectiva. Los acogedores van a ser elegidos por dos profesionales a través de la declaración de idoneidad, los mismos tienen un estatuto de protección.

La constitución de la figura del acogimiento puede ser realizada a través de dos formas distintas: la constitución administrativa (no hay oposición a la medida por parte de los progenitores) y la constitución judicial (llevada a cabo cuando hay una oposición a la misma). Se extinguirá en el momento que cese la situación que propiciaba la necesidad de interposición de una figura de protección al menor.

Por ende, el acogimiento residencial en Cantabria es la medida predominante y va a tener su regulación en la Ley 8/ 2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia.

ABSTRACT:

Fostering is an essential figure in the protection of helpless minors, it must always be borne in mind that the minor is a vulnerable subject of law who will need support that in most cases is provided by the family itself biological, at the moment in which this protection is non-existent, the state will act providing an alternative fostering.

The figure of fostering has evolved in parallel with society, different forms of foster care will be presented taking into account the circumstances of the case, minors will be assessed independently, in this way they will be provided with the most protective measure. effective. The hosts will be chosen by two professionals through the declaration of suitability, they have a protection status.

The constitution of the foster care figure can be carried out in two different ways: the administrative constitution (there is no opposition to the measure by the parents) and the judicial constitution (carried out when there is an opposition to it). It will be extinguished at the moment that the situation that led to the need to file a protection figure for the minor ceases.

Therefore, residential care in Cantabria is the predominant measure and will be regulated by Law 8/2010, of December 23, on the guarantee of rights and care for children and adolescents.

PALABRAS CLAVE: Acogimiento, menor, protección, interés superior, desamparo.

KEY WORDS: Fostering, younger, protection, superior interest, neglected

1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo abordare la figura del acogimiento, la cual es una figura esencial en la sociedad, a través de este se va a conseguir el bienestar de los niños y niñas que están sufriendo una situación de desamparo familiar. De esta forma, se proporciona a todos estos niños un entorno seguro y afectivo.

En España teniendo en cuenta los últimos datos obtenidos por las estadísticas realizadas por el Observatorio de la Infancia, reflejadas a través del Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia número 22¹ se ha producido un aumento general del número de menores tutelados por nuestro sistema de protección, es destacable afirmar que el acogimiento residencial está siendo la medida de protección predominante, en contra de lo recomendado por la LOPM.

El sistema de protección de la infancia y la adolescencia (la protección del menor es un derecho fundamental en nuestra sociedad) contiene como núcleo esencial el interés superior del menor, el cual, constituye un derecho sustantivo de los menores de edad, un principio general del derecho que debe constituir e interpretar el ordenamiento jurídico, al igual que como una norma de procedimiento a seguir siempre que se tomen decisiones que afecten a menores de edad.

Conviene destacar que el niño es un sujeto de derechos con necesidad de recibir apoyo de personas adultas, especialmente de sus familias al carecer estos de una autonomía suficiente para hacer valer sus derechos (capacidad de obrar).

El menor debe ser educado dentro del ámbito de su propia familia, implicando pues tenerlo en su compañía siempre que, aún con dificultades, sea capaz de asegurar el desarrollo de su personalidad de forma libre, los poderes públicos subsidiariamente deben garantizar dichos derechos.

La familia es el núcleo y medio natural para el crecimiento, bienestar y protección de los niños. Los niños deben vivir en un entorno en el que se sientan apoyados, protegidos y cuidados y que promueva todo su potencial, la ausencia o falta total o parcial del cuidado parental provoca que los niños se encuentren en una situación especial de riesgo. El problema surge cuando la propia familia del niño no puede proveer al cuidado del niño o cuando lo abandonan, en estas situaciones será el estado el responsable de

¹ Actualizado en la web: el 20 de diciembre de 2020.

proteger los derechos del niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado, con las entidades públicas competentes.

Las necesidades de la infancia, su protección y velar por un adecuado desarrollo y maduración es un objetivo y obligación de toda la sociedad, es por esto, que cuando las propias familias no son capaces de asumir dicha responsabilidad será el resto de la sociedad la que deba actuar, el estado en nombre de todos, debe responsabilizarse y atender a estos niños, promoviendo las atenciones básicas necesarias, velará por medio de las autoridades competentes por la supervisión del bienestar, desarrollo y seguridad de todo niño en acogimiento alternativo. Todas las decisiones que sean tomadas deben fundamentarse en el interés superior del niño, respeto pleno a los derechos del niño, a ser oído y a que sus opiniones se tengan en cuenta y el derecho a toda la información necesaria.

Afortunadamente, nuestra sociedad está implicada en proteger a todos los menores tal y como se puede observar tanto en la legislación interna (P.ej: LO 8/2015) como en materia internacional con su mayor regulación en el Convenio sobre los derechos del niño realizado el 20 de noviembre de 1989. Toda la regulación presente se va a basar en el interés superior del menor, es indispensable que todas sus necesidades básicas se vean satisfechas, debe de crecer y desarrollarse como persona en un ambiente familiar apto, libre de violencia, en el cual se sienta querido y valorado. A pesar de su gran regulación, desgraciadamente la situación de desamparo y exclusión social de menores se encuentra presente en la totalidad de países del mundo, los menores necesitan de unas necesidades especiales, son seres vulnerables cuando hablamos de vulnerabilidad nos estamos refiriendo a un término muy amplio, valorable caso por caso conforme las situaciones presentadas por cada menor).

Toda medida de protección que sea llevada a cabo debe de tener en cuenta el principio del interés del menor, en virtud de la observación general nº14 (2013) del Comité de los derechos del niño en el ámbito de Naciones Unidas, el interés del menor tendrá tres dimensiones:

1.- Un derecho sustantivo: se puede definir como el derecho que presenta el menor de que su interés sea una consideración fundamental, que deba evaluarse, teniendo en cuenta los diferentes intereses a la hora de tomar una decisión, también se incluirá la

garantía de que este interés siempre se va a practicar respecto las decisiones que impliquen menores.

2.- Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una decisión jurídica admite varias interpretaciones se tendrá en cuenta la que cumpla de manera más efectiva con el interés del menor.

3.- Una norma de procedimiento: la toma de decisiones en todo caso va a implicar la valoración de las posibles consecuencias tanto positivas como negativas de la decisión.

El objetivo que quiero conseguir a través del presente trabajo es hacer más visible una triste realidad que afecta a gran cantidad de menores en todo el mundo, situación que la gran mayoría de la población desconoce, el menor desamparado es un sujeto muy vulnerable, todos tenemos la obligación de protegerlo, con el fin de atenuar las deficiencias y riesgos de los menores.

En resumen, a través del presente trabajo desarrollaré los asuntos relativos a la figura del acogimiento de menores en nuestro país, haciendo una somera referencia al ámbito internacional de la materia.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS: LA PROTECCIÓN DEL MENOR

Denominamos menor a todo ser humano con edad menor a 18 años, los menores carecen de capacidad de obrar la cual, puede ser activa, referida a la aptitud para realizar algún acto o negocio jurídico o pasiva, que es la referida únicamente para ser sujeto pasivo de una relación. La capacidad de obrar puede manifestarse de varias formas, plena (para realizar toda clase de actos no afectados de algún requisito especial), limitada (presencia de una causa que la limita) y especial (exige alguna condición especial), en la adquisición de la capacidad de obrar plena se fijan requisitos objetivos para presumir que convergen las condiciones objetivas de madurez intelectual y volitiva necesarias para llevar a cabo actos jurídicos ordinarios, la circunstancia determinante de la capacidad de obrar es la mayoría de edad la cual es alcanzada al cumplir los 18 años.

La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, teniendo su anclaje en el art. 39 CE supuso un importante cambio legislativo, a través de la presente ley se establece

la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, especialmente de los menores de edad²

La Ley Orgánica 1/1996 está sometida a constantes revisiones dada la importancia del asunto a tratar, ejecutando los necesarios ajustes para adaptarla a la evolución social, dotándola de una mayor coherencia y eficiencia. La reforma del sistema de protección de los menores ha sido realizada por el legislador español a través de dos leyes estatales, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la ley 26/2015 de 28 de julio. Ambas modifican el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

La guarda y protección de los menores se lleva a cabo, normalmente, en el seno de su propia familia, a través de la patria potestad para el caso de hijos menores no emancipados. Sin embargo, en virtud del art 39.2 CE, es preciso ejecutar un sistema público de protección de los menores, para el caso de que la patria potestad o las instituciones tuteladas sean insuficientes para una adecuada protección del menor, en las medidas de protección del menor se buscará siempre su interés, debiendo mantenerlo, salvo que el propio interés del menor lo desaconseje, en el medio familiar de origen. Es necesario procurar, siempre y cuando no sea contrario a su interés, la reintegración en la propia familia y que los hermanos se mantengan unidos.

Como medida excepcional se configura el alejamiento del menor del núcleo familiar, dicha medida solo podrá ser ejecutada en aquellos supuestos en los cuales la permanencia en la familia sea claramente perjudicial, casos en los que el derecho de los padres a tener consigo a sus hijos se ve cedido ante el interés superior del menor, debe intentarse el reintegro del menor en su familia de origen siempre que sea posible y salvo que la desprotección sea definitiva.

Los poderes públicos son los encargados de asegurar la protección integral de los hijos, de asegurar que los padres presten a sus hijos toda la asistencia necesaria y, además, deben de velar prioritariamente y de modo decidido por la protección del menor consagrado tanto en la CE como los tratados internacionales (1). Son destacables en

²La protección del menor tiene una regulación exhaustiva, en el marco internacional encontramos el Convenio de Derechos del Niño de 1989, el cual fue tenido en cuenta por el legislador español para la creación de la citada ley orgánica.

nuestra normativa una serie de Tratados Internacionales encargados de proteger la figura del menor:

A.- Declaración universal de los derechos humanos (Nueva York, 10 diciembre de 1948): En esta declaración se señala que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.

B.- Convención sobre los Derechos del Niño de 20 noviembre de 1989, ratificada por España el 30 noviembre de 1990, por primera vez se habla en este tratado del interés del menor. En su art. 3 señala que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas, privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, tendrán en consideración principal o primordial a atender el interés superior del menor.

En la Convención sobre los Derechos del Niño, se contemplan tres tipos de derechos³:

- De protección: derecho a la vida, a la convivencia familiar o contra todo tipo de abuso, violencia o explotación laboral.
- De provisión: derecho a cuidados sanitarios, a un medio ambiente saludable o a los recursos para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
- De participación: derecho a una identidad y nacionalidad, a recibir información o a opinar con libertad.

C.-El Convenio Europeo sobre Reconocimiento y Ejecución de decisiones materia de custodia de menores y restablecimiento de dicha custodia, suscrito en Luxemburgo el 20 mayo de 1980 y ratificado en España el 9 de mayo de 1984, en él se incluye la posibilidad de denegación de dicho restablecimiento de custodia si por un cambio de circunstancia los efectos del traslado pueden ir en contra del interés del menor.

D.- El Convenio de La Haya de 25 oct. 1980, ratificado por España en 28 mayo 1987, sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, contiene como excepción a la norma general del reintegro del menor sustraído, siempre que esté integrado en su nuevo medio, que exista riesgo de que la restitución represente un

³ Todos estos derechos se basan en cuatro principios fundamentales que son, la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo y el derecho a la participación.

peligro físico o psíquico, una situación intolerable para el menor o que este se oponga, siempre que cuente con la edad y madurez apropiada. (2)

Los tribunales junto con la LO 1/ 1996 en su art. 11 consideran que junto con el principio de supremacía del interés del menor se encuentra el principio de prioridad de la familia natural que se regula en el artículo 172.4 C.C y su integración familiar y social. El principio de prioridad en la familia natural puede verse limitado cuando el interés del menor necesite de otras medidas, el derecho de los padres biológicos no se reconoce como un principio incondicional respecto a la adopción de medidas contra el desamparo de un menor (3)

Cuando hablamos del principio del interés del menor, debemos desglosarlo en dos tipos de aspectos, el aspecto positivo, que hace referencia a la búsqueda del provecho del menor; y un contenido o aspecto negativo, el de procurar evitarle un daño. El bienestar del menor es el único criterio que debe ser entrado a valorar sobre la necesidad de injerencia de la Administración en la unidad familiar, el interés que debe valorarse será el de los menores individualizados, caso por caso, con nombres y apellidos (4) (5)

Es difícil conocer cuál es el interés superior del menor, al tratarse este de un concepto jurídico indeterminado, doctrinalmente, este interés puede definirse en cierto modo como la suma de diversos factores que tienen en cuenta las circunstancias personales de los progenitores (motivo por el cual se prioriza la acción preventiva, fomentando las actividades que favorezcan la integración del menor en el entorno familiar), las necesidades afectivas de los menores junto con las necesidades personales, materiales, familiares, culturales y sociales, las cuales deban de ser objeto de valoración para evitar desestabilizar al menor incurriendo en factores de riesgo. (6)

El principio de intervención mínima limitará las actuaciones administrativas a lo estrictamente necesaria, dándose prioridad a la actuación en el entorno familiar evitando, siempre que sea posible, la separación del menor de sus padres biológicos. La administración, en la aplicación de medidas de protección, ha de actuar en todo momento con la máxima flexibilidad y siempre regida por el principio de proporcionalidad. En el caso de que no fuera posible mantener al menor junto con su familia, la entidad pública deberá velar por amparar los medios necesarios que posibiliten la recuperación de la convivencia del menor con su círculo familiar.

Por ende, según Iglesias Redondo, el concepto de “interés del menor”, radica en “la mayor suma de ventajas, de cualquier género y especie, así como del menor número de inconvenientes que al menor le reporta una situación determinada respecto a otra, desde el exclusivo punto de vista de su situación personal, y siempre proyectado al futuro”.

3. LA SITUACIÓN DE RIESGO Y DESAMPARO.

La LOPJM en sus arts. 12 a 22 quinquies, dispone un sistema subsidiario de protección pública de aquellos menores cuyos padres o personas encargadas de su amparo no actúan de forma adecuada, dicho sistema se establece a través de la prevención y reparación de las situaciones de riesgo y, en última instancia de la declaración de desamparo del menor.

La situación de riesgo fue objeto en el art. 10 de la Ley 26/2015, además es aludida de forma implícita en el art. 27 de la Convención de derechos del niño de 1989 pero no es contemplada en el C.c.

Se va a considerar situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin tener la intensidad o persistencia que implicaría su declaración de situación de desamparo, acompañada de la asunción de la tutela por ministerio de la ley haciéndose de este modo necesaria la intervención de la Administración Pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afecta, evitando así su desamparo y exclusión social, sin ser separado de su entorno familiar. La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar.

(7)

Tendrá especial relevancia, requiriendo un tratamiento individualizado a estos dos estados específicos en los que se puede encontrar el menor:

1º. La intervención en las situaciones de posible riesgo prenatal para evitar una declaración de la situación de riesgo o desamparo del recién nacido. Es lo conocido como la protección del nasciturus (menor concebido, pero no nacido), por lo tanto, se va a entender como situación de riesgo prenatal la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, así como cualquier

acción propia de la mujer o de terceros tolerada por ella, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar en el feto enfermedades o anomalías físicas, sensoriales o mentales. En el caso de producirse, el servicio de salud deberá de comunicarlo a la Administración Pública a la que le competa junto con el Ministerio Fiscal.

2º. La atención sanitaria necesaria del menor no consentida por sus progenitores u otros responsables legales, conduce a la declaración de riesgo. Dicha negativa es regulada en el art. 17.10 LOPJM 1996, esta previsión generó la modificación del art. 9 de la ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Las decisiones que sean contrarias al mayor beneficio para la vida o salud del paciente se deberán de poner en conocimiento de la autoridad judicial directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, en caso de que fuera una urgencia, los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la vida o salud del paciente. (8)

Junto con estos dos estados se puede configurar como un indicador de una situación de riesgo el tener un hermano declarado en tal situación, salvo que se hubiera producido un cambio de las condiciones familiares, además, sería también un indicador la pobreza infantil. (9)

El término de riesgo y desamparo son excluyentes, es decir, es riesgo aquello que no es desamparo, existiendo de tal modo una zona de duda a efectos de verificar si nos encontramos ante una situación de riesgo o de desamparo.

Cuando la administración constata el hecho que el menor se encuentra en una situación de desamparo, la Entidad Pública se ve obligada de forma automática a la tutela de este, teniendo que adoptar las medidas necesarias para su guarda. Esta es la forma más importante e intervencionista por parte de la Administración dentro del campo de protección de menores. (10) La declaración de desamparo produce una importante variación del status familiar, tanto respecto de los menores sujetos a la patria potestad como de los progenitores a los que se la han privado. (11)

En definitiva, podemos definir la declaración de desamparo como una resolución administrativa producto de un procedimiento que es también administrativo y presupuesto necesario de la tutela ex – lege. Es destacable la SAP de 3 de julio de 2009 dictada en Cuenca, en la cual se dice de forma expresa “*que el desamparo se configura*

*como la base imprescindible para una inmediata intervención administrativa de protección, y que abarca no sólo los supuestos de carencia de personas que se hagan cargo del menor, sino también aquellos casos en que, existiendo tales personas están imposibilitados para el ejercicio de los deberes de protección, o se revele el mismo como inadecuado”.*⁴ La situación de desamparo se va a caracterizar por la falta o privación de la asistencia y protección moral y material necesarias (debido al incumplimiento de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores), lo que determina, la tutela automática de dichos menores por parte de la Entidad Pública, implicando en consecuencia, la privación de la guarda y custodia que correspondería a sus padres naturales o biológicos, es necesario que se examine caso por caso las circunstancias específicas, consiguiendo un equilibrio entre el beneficio del menor y la protección de sus relaciones paterno-filiales. Solo se estimará la existencia de desamparo cuando se acredite de forma fehaciente, el incumplimiento de unos mínimos de atención al menor, exigidos por la conciencia social más común. Es decir, debe de ser estimada de forma restrictiva. (12)

Para que proceda la declaración de desamparo se deben de dar 2 requisitos cumulativos. (13)

- Requisito subjetivo: Se produzca una dejación de los deberes de asistencia moral y material por parte de quienes ejercen la guarda del menor.
- Requisito objetivo: Se constate un resultado de abandono (carencia de asistencia).

Se entenderá la existencia de una situación de desamparo cuando se de alguna de las siguientes circunstancias con alta gravedad, que, valoradas y ponderadas conforme los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad física y mental del menor:

⁴ Otra sentencia que es destacable es la STS 5817/2009- ECLI: ES: TS: 2009: 5817 “*Se considera como situación de desamparo, la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material, de manera que el desamparo ha de considerarse, en primer lugar, como una situación fáctica querida o no en la que se encuentran los menores y que se caracteriza, en esencia, por la falta o privación de la asistencia y protección necesarias, y ello, determina, por ministerio de la ley, la tutela automática de dichos menores por parte de la entidad pública a quien en el respectivo territorio esté encomendada la protección de los menores, e implica, por ende, la privación de la guarda y custodia que sobre dichos menores pudiera corresponder, a sus padres naturales o biológicos. Se han de examinar minuciosamente las circunstancias específicas de cada caso concreto, atendiendo fundamentalmente al interés del menor*”.

- 1º.- El abandono del menor.
- 2º.- El transcurso del plazo de guarda voluntaria.
- 3º.- El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor.
- 4º.- El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato psicológico continuado o falta de atención.
- 5º.- El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares.
- 6º.- La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación del menor.
- 7º.- La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada.
- 8º.- Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor.

En virtud del apartado 8º podemos considerar que se trata de una lista abierta de circunstancias en las que puede encontrarse el menor, que conlleven a la declaración de desamparo. (14)

La finalidad de la declaración de desamparo⁵ es proteger al menor que en el seno de su familia es privado de la asistencia debida, moral y materialmente. Otra finalidad es la búsqueda de la reinserción del menor en su propia familia o cuando esto no sea posible en otro ámbito familiar, mediante el acogimiento. Es necesario destacar que cuando la Administración Pública se hace encargado de un menor se debe elaborar un plan individualizado de protección que establezca los objetivos, previsión y plazo de las medidas de intervención que se adoptarán con la familia de origen, junto con el programa de reintegración familiar.

La declaración de desamparo a diferencia de la situación de riesgo tiene como efecto inmediato la separación del menor de su familia, pero al igual que en la situación de

⁵ En virtud de la STS 5817/2009- ECLI: ES: TS: 2009: 5817 el acogimiento se va a basar en una serie de principios “ A) El interés superior de los menores, sobre cualquier otro que se estime legítimo (interés reflejado, antes de la comentada Ley, en las normas constitucionales, en el Código Civil; y por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sentencias de 2-3-1983; de 12-2-1992 y de 21-7-1993 entre otras) B) En relación íntima con el bien de aquellos (se integra y funde dentro de él), la condición o el carácter educativo, que toda medida de amparo ha de tener con respecto a los mismos. C) La idea de que las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se han de interpretar de manera restrictiva ”

riesgo se va a prever la intervención con la familia para posteriormente lograr de nuevo su reintegración. En condiciones normales, la separación suele ser de naturaleza temporal salvo que las circunstancias del menor atendiendo al caso viera inviable el retorno a la familia, en este caso se adoptarán medidas más permanentes y definitivas (adopción o acogimiento permanente), aunque la intención de la propia Administración Pública es la intervención en el seno familiar para mejorar la situación y conseguir que el menor se vuelva a reintegrar en su familia de origen.

Para la constitución del desamparo es necesario que tenga lugar un procedimiento extrajudicial, cuando una autoridad detecte una situación de riesgo o desamparo de un menor lo comunicará a la autoridad o a sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise. Se puede iniciar de oficio o a instancia de parte al estar toda persona obligada a denunciar o poner en conocimiento de la autoridad las situaciones de desprotección del menor, procediendo la Administración a verificar la misma. Si se constata el objeto, mediante resolución administrativa se declarará dicha situación, asumiendo la tutela de este por ministerio de la ley, adoptando las medidas de protección necesarias. La administración se lo comunicará al Ministerio Fiscal o al juez que acordó la tutela ordinaria junto con la resolución administrativa para que declare la situación de desamparo con las medidas adoptadas y sean notificadas legalmente a los progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado su tuviera madurez suficiente, más de doce años, en un plazo máximo de 48 horas. La notificación será clara, comprensible y en formato accesible incluyendo las causas y efectos de la decisión adoptada. En el caso de la notificación del menor será facilitada de forma personal y adecuada a su grado de madurez.

La resolución administrativa a través de la cual se declarará el desamparo del menor produce efectos de naturaleza civil y administrativa, al producirse la suspensión de la patria potestad (perdida temporal) y la atribución a la administración de la tutela del menor, la suspensión solo afecta a las facultades de naturaleza personal ligadas a la patria potestad. (15)

La extinción de la tutela administrativa se producirá una vez cesen o desaparezcan las causas que motivaron la declaración, que el menor cumpla la mayoría de edad, haya sido adoptado, haya fallecido, se le haya concedido el beneficio de la mayoría de edad, la recuperación de la patria potestad, que el menor se haya trasladado voluntariamente a otro país, que se haya mudado a otra CCAA o que haya transcurrido 6 meses desde que

el menor hubiera abandonado voluntariamente el centro de protección estando en paradero desconocido. Los progenitores tienen la oportunidad de pasados 2 años desde la resolución a solicitar a la Entidad Publica que cese la suspensión y quede revocada la declaración de desamparo por cambio en las circunstancias que la motivaron. (16)

En conclusión, es recomendable destacar que la declaración de desamparo y la constitución de un acogimiento son medidas que deben adoptarse siempre con la máxima cautela y de manera subsidiaria, buscando siempre un equilibrio entre el beneficio del menor y la protección de las relaciones paternofiliales, ya que en la práctica la declaración de desamparo suele convertirse en definitiva y de difícil retorno con su familia cuando es prolongada en el tiempo.

4. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FIGURA DEL ACOGIMIENTO.

El acogimiento familiar tiene una larga tradición en los países de nuestro entorno, aunque con diferentes formas en atención a la cultura del país, se remontan a los siglos XVIII y XIX, en estos siglos ya había presentes figuras afines al acogimiento. Previo al acogimiento podíamos encontrar en nuestro país algunas figuras que en cierto modo podrían ser semejantes a esta, en el siglo XVIII existía ya la figura de la nodriza, las cuales eran mujeres residentes en los pueblos que cuidaban los hijos ajenos hasta los 7 años a cambio de un salario, eran una especie de madres sustitutas, dicha figura fue regulada ese mismo siglo en el Reglamento de la Inclusa de Madrid. Existía la costumbre de confiar niños a institucionalizadas familias para que las cuidasen. Esta práctica carecía de control alguno, pudiendo provocar abusos por parte de algunas familias, debido a esto, en 1788 se publicó una Real Orden de Carlos III a través de la cual, se encomendaba a los encargados de las instituciones que los niños debían ser colocados en familias que pudieran garantizar un mínimo de formación y educación. (17)

Existió también la figura del prohijamiento, regulada en la Ley de la Beneficencia de 1822 y en una Real Cédula de 1796, mediante la cual los menores de edad se incorporaban a la convivencia de una nueva familia de forma permanente, permitiéndose que pasados una serie de años pudiera darse en adopción, esto podría asimilarse a un acogimiento preadoptivo. Su aplicación fue mínima. (18)

La preocupación por regular esta medida de protección infantil será instaurada fuertemente en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX, dicha promoción e intensificación se dieron como consecuencia del gran número de estudios que probaban la evidencia de los efectos negativos producidos a consecuencia de la institucionalización de los menores en su desarrollo personal y social.

La Constitución Española de 1978 recoge en su art. 39 la protección tanto del menor como de la familia obligando a los poderes públicos a asegurar una protección a la familia, como marco idóneo donde pueda ser desarrollado el individuo y pueda ser atendido.

La colocación familiar podría ser el antecedente más parecido al acogimiento, la cual era regulada durante la Guerra Civil mediante la Orden de 1 de abril de 1937 para la atención a niños huérfanos y abandonados la cual es recogida e impulsada en el Texto Refundido sobre Tribunales Tutelares de Menores y Protección de Menores de 1958. Estos tribunales podían suspender a los padres del derecho de la guarda y educación a consecuencia de no ejercer los deberes inherentes a la condición de padres. En estos casos, el niño era entregado a la Junta de Protección de Menores, que era la encargada de colocar al menor en una familia o centro de menores. (19)

La práctica de la guarda y custodia llevada a cabo en España por MACI (Movimiento de Atención a Cierta Infancia) puede constituir también un antecedente peculiar, comenzó en Cataluña en 1975 con la iniciativa de L. Sanz, esta asociación se establecía en las provincias a través de acuerdos con los Tribunales Tutelares de Menores con el objetivo de colocar en familia a menores que estuvieran en situaciones de abandono o semi-abandono, se solicitaba una medida de guarda y custodia a cargo de una familia que era elegida por MACI, si dicha medida se prolongaba en el tiempo la familia podía solicitar la adopción del menor. A finales de la década de los setenta, surgen equipos con profesionales especializados en el área del menor en diferentes CCAA (Valencia, Aragón, Galicia, Baleares, Madrid, Murcia, Asturias y Andalucía). Es en el año 1984 cuando se establecen los primeros servicios de acogimiento familiar en el sentido moderno del término en Barcelona y Girona a los que se les denomina acogimiento temporal por la previsión de retorno con la familia biológica, la cual se va extendiendo de forma paulatina. (20)

Antes de esta fecha, no existía concretamente un antecedente al acogimiento familiar actual, tal y como señalaban Caparrós y Jiménez Aybar. Esta figura se introdujo con la ley 21/1987, de 11 de noviembre, de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en Materia de Adopción y de otras Formas de Protección de Menores. Se plantea dicha figura como una gran alternativa para los niños que se vieran obligado a tener que ser separados de su familia. Hasta el 1987 la medida ante estas situaciones era el internamiento en un centro u hogar de acogida, donde permanecían largos años hasta alcanzar la mayoría de edad. Dicha ley, fue inspirada en otras legislaciones europeas, especialmente la ley italiana 4 de maggio de 1983, nº 184 “Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori”. (21)

La ley 21/1987 supuso un importante cambio radical de la acción social en favor de la protección de menores, dicha práctica en España fue reforzada durante el franquismo con la actuación del Patronato de Protección de Menores, el Auxilio Social o las obras benéficas de las diputaciones, todas crearon su propia red de instituciones y centros de acogida de menores. Las metas claves de la ley 21/1987 fueron:

- A.- La desjudicialización de las primeras etapas de protección, agilizando su aplicación.
- B.- El papel de las entidades públicas a través de los servicios sociales se ven potenciadas.
- C.- La profundización de la idea de un Ministerio Fiscal, defensor real del menor.
- D.- La prioridad del tratamiento del menor en su propia familia.
- E.- Se permite de forma automática la asunción por parte de la entidad pública de la tutela de los menores que se encontrarán en situación de desamparo.
- F.- Se considera la adopción como un elemento de plena integración familiar y el acogimiento como una nueva institución de protección.
- G.- Se regulariza y simplifica el procedimiento, para lo cual se procedió a modificar los arts. 172 y siguientes del C. c. (22)

A través de la Ley 21/ 1987 se favorece la creación de programas de acogimiento familiar en el 60% de las diferentes delegaciones territoriales de protección de menores existentes en España, dos años después de su vigencia solo un 4% de las delegaciones existentes no utilizaban dicho sistema. A principio de los años noventa convergen

factores que potencian el acogimiento en las CCAA más innovadoras, estos factores eran: la formación de los profesionales, el cambio en la utilización de programas de protección, la determinación de la metodología de intervención y la elaboración de guías y programas. Podemos resumir esta etapa en una gran motivación que los profesionales presentaban, gracias a esto se crea el Centro de Estudios del Menor del Ministerio de Asuntos Sociales que potencia la formación de los profesionales, además, se potenció la creación de materiales e instrumentos para la valoración y la formación de familiar de acogida. (23) (24)

Posteriormente, en el año 1996 se publicará la Ley Orgánica de Protección del Menor (1/1996 de 15 de enero), para de esta manera poder contar con un instrumento que reconozca de forma plena y regule en todos los aspectos legales el acogimiento en todas sus formas. Reconoce a los menores como sujetos activos y de derecho de protección modificando de manera parcial el Código Civil abordando de este modo la protección del menor de una forma correcta. Dicha ley viene a cubrir lagunas de la Ley 21/1987, adaptándola a las nuevas realidades y demandas que van surgiendo. Aporta como novedades, la diferenciación explícita de acogimiento familiar y acogimiento residencial, así como las distintas formas de ejercer la guarda de los menores, flexibiliza la acogida familiar, permite a la entidad pública acordar un acogimiento provisional en la familia aun cuando los padres se opongan y no consientan y en tanto se produzca una resolución judicial.

Por ende, en el año 2015 se aprueba la Ley 26/ 2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, a través de la cual se modificará la LO 1/1996, el Código Civil, la ley 54/2007 de Adopción Internacional y la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. El objetivo de esta es adaptar los instrumentos de protección de menores a los cambios sociales, con ella se introduce un nuevo capítulo III en el título I de la Ley Orgánica 1/1996 con la rúbrica << Deberes del menor>>, a través de la cual es reconocido a los menores como titulares de deberes, regulándose los deberes de estos en general y en los ámbitos familiar, escolar y social. Además, se refuerza la posición del menor frente a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotación de los menores, estableciendo el deber de que toda persona que tuviera constancia de ello deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Es creado el Registro Central de Delincuentes Sexuales y se lleva a cabo una reforma de las instituciones de protección a la infancia bajo el principio rector

de prioridad a las medidas estables frente a las temporales, las familiares frente a las residenciales y las consensuadas frente a las impuestas. Asimismo, se simplifica la constitución del acogimiento familiar, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez y se establece la obligación de la Administración de preparar para la vida independiente a los jóvenes ex tutelados. (25)

Dentro de las modificaciones que supuso en el Código Civil son destacables la modificación de normas sobre las acciones de filiación, se aclara la competencia de la Administración Pública para establecer por resolución motivada el régimen de visitas y comunicaciones respecto a los menores en situación de tutela o guarda, así como su suspensión temporal, informando de ello al Ministerio Fiscal, además se modifican los preceptos que regulan el desamparo, la guarda provisional y voluntaria y el acogimiento..

Por último, en la LEC se introducen disposiciones para promover la acumulación cuando existieran varios procesos de impugnación de resoluciones administrativas en materia de protección que afecten a un mismo menor, se prohíbe la ejecución provisional de sentencias que se dicten en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, y se establece un mismo procedimiento para la oposición a todas las resoluciones administrativas, con independencia de su contenido o de las personas afectadas.

5. MODALIDADES DE ACOGIMIENTO

Tal y como establece el auto AP Ávila del 29 de junio de 1996, << *el acogimiento es definido por la doctrina científica como aquella situación temporal y revocable, orientada a la protección de menores que se encuentran privados – aunque sea circunstancialmente- de una adecuada atención familiar y consiste en confiar al menor al cuidado de personas que reúnan las condiciones morales y materiales necesarias para proporcionarle sustento, habitación, vestido y especialmente, una vida familiar conforme con los usos sociales. El acogimiento produce la plena participación en la vida de la familia e impone a quien le recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral* >>.

De manera similar lo expresó el auto de la AP 16ª Barcelona de 20 de junio 1991, afirmando que << *el acogimiento de menores tiene por objeto proteger temporalmente a los menores que se encuentran privados de un ambiente familiar idóneo o en*

situación de desamparo forzoso por circunstancias graves que impiden la función asistencial del menor por quien ostenta su guarda y custodia, o desamparo culposo cuando los padres o tutores se desentienden de sus deberes o los ejercen incorrectamente>>.

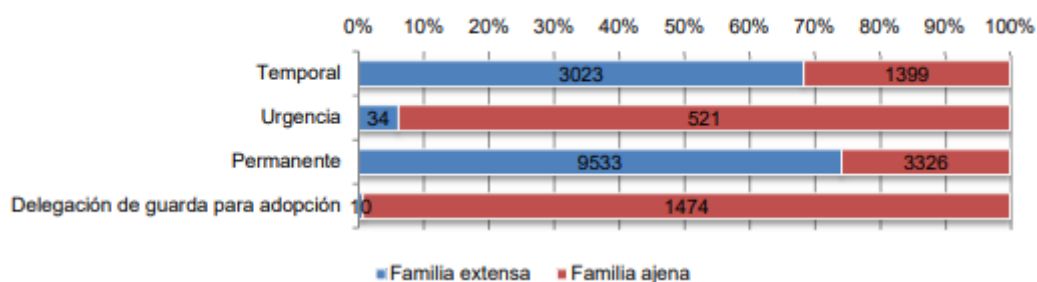
Desde el punto de vista jurídico, puede ser definido como un negocio jurídico dentro del derecho de familia, formalizado por escrito entre las partes, que son la entidad pública y el acogedor. Solo existirá intervención judicial en el caso de que los titulares de la patria potestad o tutela nieguen su consentimiento. Por lo tanto, el acogimiento es estrictamente una medida de protección del menor. El acogimiento debe ser considerado una situación transitoria, que tiene como objetivo el atendimento del menor, procurando la reinserción de este en su propia familia siempre que fuese posible. (26)

Como principios rectores en la materia pueden destacarse:

- 1º) Interés superior del menor (STS 2 de diciembre de 2015)
- 2º) Prioridad de reintegración en la propia familia, salvo que sea contrario al interés del menor.
- 3º) La guarda de menores debe confiarse a una misma institución o persona para que parezcan unidos. (27)

Dentro de los rasgos característicos del acogimiento son destacables notas como: su carácter personal, solo impone al acogedor las obligaciones, es subsidiario respecto de las medidas de ayuda o apoyo a la familia (solo podrá adoptarse cuando la ayuda familiar sea insuficiente para conseguir la reinserción del menor), es una medida esencialmente temporal, la cual tiene como límite máximo la mayoría de edad, es revocable mediante previa comunicación a la Entidad Pública y, por último, podría ser retribuido a cargo de la entidad si la formalización del mismo es administrativa y la fijará el juez si es judicial.

Gráfico 26. Acogimiento familiar por modalidad y tipo de familia



5.1. EL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL.

El acogimiento residencial puede definirse como aquel que implica un internamiento del menor desamparado en un servicio, hogar funcional o centro, regulado por la entidad pública que debe autorizarlo y acreditarlo⁶. En este tipo de acogimiento se debe atender de forma especial y precisa la seguridad, sanidad, número y calificación de los empleados, así como al proyecto educativo y demás condiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de sus derechos. La entidad pública será la encargada de inspeccionar y supervisar los centros semestralmente, y cuando así sea exigido por las circunstancias se realizará bajo la inspección del Ministerio Fiscal. En esta modalidad serán los profesionales del centro los sujetos obligados a ejecutar los deberes de los acogedores. (28)

El acogimiento residencial tiene un carácter subsidiario frente al familiar para cualquier menor, sobre todo para aquellos que son menores de seis años, en menores de tres años dicha modalidad estará excluida⁷. Este tipo de acogimiento solo tendrá lugar cuando hayan sido agotado todas las posibilidades de mantener al menor en su familia o no se considere adecuado el acogimiento familiar. Al igual que las otras modalidades de acogimiento, esta modalidad deberá ejercerse durante el tiempo estrictamente necesario, debiéndose de impulsar la integración del menor en su entorno social, sistemas ordinarios educativos, sanitarios y laborales, considerando que estos menores serán objeto de un tratamiento educativo individualizado que se acople a sus situaciones personales y sociofamiliares, para hacer frente a todo esto, se recogerán todos los detalles en un proyecto educativo para cada menor junto con el proyecto general del centro de acogida en el que se encuentren. (29)

⁶ El ente público además, será el tutor del menor.

⁷ El art 21. 3 LOPJM prevé que no se acordará acogimiento residencial para menores de tres años, salvo en los supuestos de imposibilidad, válidamente constatada, de adoptar en ese momento el acogimiento.

El acogimiento residencial presenta una mínima regulación en el Código Civil y LO 1/ 1996, por lo que los ordenamientos autonómicos⁸ van a ser los encargados de regular más extremos de la materia como son: la proximidad del centro de acogida con el entorno familiar y social y las visitas de familiares, los derechos y obligaciones de menores residentes, las clases de centro, los acogimientos de menores con deficiencias o discapacitados, el procedimiento de ingreso en los centros, etc. (30)

El acogimiento residencial será la modalidad más adecuada en los siguientes casos en los que se prevean determinadas circunstancias:

- a) Que se prevea que la situación de desprotección va a ser transitoria.
- b) Que los equipos técnicos competentes desaconsejen el acogimiento familiar.
- c) Que no existan familias o personas idóneas para acogerlo.
- d) Que aún concurriendo los requisitos para el acogimiento familiar preadoptivo, este no haya sido constituido. (31)

El procedimiento de ingreso en acogimiento de un menor de edad en un centro deberá seguir unos requisitos, deberá ser notificado por escrito, de forma inmediata, a los progenitores que no hayan sido privados de la patria potestad, personas que ejerzan la tutela o guarda y al Ministerio Fiscal.

5. 2. EL ACOGIMIENTO FAMILIAR.

El acogimiento familiar puede ser definido como la modalidad ejercida por la persona o personas que determine la entidad pública. Este tipo permitirá la plena participación en la vida de la familia. (32)

La entidad pública va a ser la encargada de crear unos planes de trabajo con las familias en el momento que es constituido el acogimiento, presenta unos objetivos claros, que deben ser evaluados en un periodo de tiempo delimitado en el tiempo, para de esta forma evitar que se perpetúen en el tiempo. La familia de acogida tendrá obligaciones como son la de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarse una formación. (33)

⁸ En Cantabria esto se encuentra regulado en el Decreto 58/ 2002, de 30 de Mayo, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a la protección de menores y a la adopción y se regula el registro de protección de la infancia y adolescencia. Dentro del Decreto se encuentra regulado en el título II, capítulo II.

La preferencia⁹ del acogimiento familiar resulta evidente en el texto de la LO 1/1996, reafirmandose en el art. 11.2, en el cual se delimitan los principios rectores de la actuación de los poderes públicos, concretamente en el apartado b) se establece el mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su interés, esta preferencia también es establecida en el art. 21.3.

Sin embargo, a pesar de esta preferencia, el acogimiento familiar no ha llegado a ser implementado plenamente en España como medida general al presentar una serie de factores que pueden obstaculizarla, teniendo esto como consecuencia que la figura del acogimiento familiar viera en peligro su virtualidad práctica, que puede dar lugar en ocasiones a interrupciones. Entre ellas cabe citar:

- 1ª.- Mayores riesgos de interrupción en los acogimientos de adolescentes.
- 2ª.- Los antecedentes del menor, que hayan sido objeto de abusos, negligencia, maltrato físico y emocional y abandono.
- 3ª.- Los tipos de medidas de protección previamente adoptadas respecto del menor.
- 4ª.- El establecimiento de vínculos de apoyo seguros con los acogedores.
- 5ª.- La integración del menor es mejor en familias sin hijos o solamente con uno, con menos de cincuenta años y con motivación basada en la solidaridad y con actitudes positivas hacia la familia biológica del menor.
- 6ª.- La adaptación del menor es mejor cuando no existe grado de parentesco con la familia de acogida y mantienen un contacto regular, pero no demasiado frecuente con los progenitores.
- 7ª.- El número de acogimientos previos llevados a cabo por la familia de acogida, falta de experiencia y profesionalización conlleva, en muchas ocasiones, la interrupción del acogimiento.

⁹ Presenta una serie de ventajas, a título de ejemplo cabe citar: 1º Las carencias afectivas dentro del entorno familiar sufridas por el menor son rápidamente cubiertas por la familia de acogida. 2º El menor cuando llega a su nuevo hogar de acogida tiene unas figuras de referencia estables y unos criterios educativos homogéneos; 3º la estabilidad hace que la mejoría del menor se vea reflejada en una mejora de la salud, de su nivel escolar y académico, su comportamiento, adquiriendo nuevos hábitos y corrigiendo conductas por modelaje; 4ª La permanencia de menores en familias de acogida es mucho más económico que gestionar centros de menores, lo que se convierte en un beneficio social; 5ª El acogimiento familiar fomenta el derecho que tiene todo menor de crecer en una familia que cubra sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales. Cfr. PEREIRO, P.: El acogimiento familiar en los sistemas de protección de la infancia y sus retos.

8ª.- El estilo educativo puesto en práctica, sobre todo el modelo autoritario.

9ª.- Los problemas de conducta manifestados por el menor unido con la carencia de experiencia y habilidades por parte de los acogedores.

10ª.- El acogimiento separado de hermanos cuando son varios los sometidos a esta medida.

A pesar de estos inconvenientes es preferente el acogimiento familiar frente al residencial. (34)

Dentro de este concepto genérico pueden hacerse diferentes distinciones, como son el acogimiento familiar en familia extensa, tiene lugar si es un familiar el acogedor y será en familia ajena si el acogedor es un desconocido para el menor. Además, encontramos diferentes modalidades que son recogidas en el art. 173 y 173 bis del C. c, pasando a ser detalladas a continuación.

I. Acogimiento familiar permanente.

El acogimiento familiar permanente es la modalidad de acogimiento que puede ser constituida por dos motivos: el fin el plazo de dos años de acogida temporal en la que no sea viable la reintegración familiar o en el caso de menores con necesidades especiales cuando así sea aconsejado valorando las circunstancias del menor y la familia. En estas situaciones, la Entidad Pública solicitará al juez que atribuya aquellas facultades de tutela que sean orientadas a facilitar el desempeño de las responsabilidades a los acogedores permanentes, todas ellas, por supuesto atendiendo al interés del menor. Normalmente, Esta clase de acogimientos perdura hasta la mayoría de edad o hasta que se encuentre una opción más adecuada, en numerosas ocasiones estos estarán influidos por la edad o las características especiales del niño y niña, siendo en algunos casos una alternativa a la adopción. (35)

Los técnicos tendrán un papel muy importante en esta modalidad, ya que la propuesta de acogimiento conllevará a los mismos para tener en cuenta una serie de factores diversos. En primer lugar, el acogimiento familiar permanente va a estar indicado en aquellos hechos que impliquen una recuperación familiar poco probable, ya sea por enfermedades crónicas, discapacidades u otras situaciones conflictivas. Uno de los aspectos más importantes para considerar esta modalidad de acogimiento es si el niño tiene algún referente afectivo que realmente permita y justifique el mantenimiento de

una relación con su familia. En el caso de ser inexistente el referente afectivo o familiar que motivase la relación familiar a lo largo del periodo de acogimiento junto con una posible convivencia posterior, se presentará como un indicio a valorar para tener de opción dicha alternativa. Este acogimiento frecuentemente puede implicar convivir de forma continuada con la familia acogedora y simultáneamente mantener además contactos con la familia biológica. (36)

Los objetivos que se tienen con los padres biológicos en las otras modalidades son diferentes a los de esta modalidad, los cuales deben verse reformulados al no haber un objetivo de retorno del menor a la familia biológica. Por lo tanto, se deberá de conseguir que exista la mejor relación posible entre ellos, procurando un clima de colaboración y coparticipación en la vida del menor, para que de esta forma el menor pueda afrontar su vida de forma tranquila.

La cualidad de permanente no exime a la Entidad Pública de ejecutar la revisión de la situación del menor acogido, al ser esta una responsabilidad que tiene la propia Entidad Pública, para asegurarse que se está velando por el interés del menor. Esta responsabilidad se encuentra regulada en el art. 12.5 LO 1/ 1996, a través del cual se le obliga a realizar una primera revisión a los seis meses del primer año y luego cada doce meses. (37)

II. Acogimiento familiar temporal.

El acogimiento familiar temporal es aquella modalidad que presenta un carácter transitorio que puede venir previsto ya sea porque la situación del menor prevea la reintegración de este en su propia familia, o porque vaya a ser adoptada una medida de protección más estable. (38)

Suele ser una fase en el proceso de estabilización de una familia, la cual tendrá como objetivo que los padres biológicos se vuelvan a hacer cargo de sus hijos con la mayor brevedad posible, es por ello, que durante la acogida los menores y su familia mantendrán relación. Por consiguiente, la familia de acogida es una especie de complemento a la familia de origen, en vez de ser sustituta, se mantiene contactos regulares y frecuentes entre el menor y su familia de origen para mantener el vínculo efectivo. (39)

Este tipo de acogimiento puede verse catalogado con carácter provisional o cautelar hasta que se constituya una medida más estable, por lo que en cierto modo puede asemejarse al acogimiento urgente, teniendo como diferencia entre ambos que el urgente solo es establecido para amparar a los menores de seis años durante un periodo máximo de seis meses, en cambio, el temporal puede amparar a cualquier menor con independencia de la edad y siendo su periodo máximo dos años. De este modo, puede ocurrir que un menor que haya estado sometido bajo un acogimiento urgente, pasado el plazo máximo de seis meses se vea afecto a un acogimiento temporal.

El plazo fijado por el legislador es de un máximo de dos años, salvo que se interponga una prórroga que sea motivada en justa causa, si se diera el caso de prórroga, la Entidad Pública será la encargada de expedir al Ministerio Fiscal un informe justificativo de la situación del menor, justificando las causas por las que no ha sido adoptada una medida protectora más estable durante estos dos años de duración del acogimiento. (40)

Respecto del acogimiento familiar temporal, es destacable un auto de la AP Barcelona 16ª de 4 de noviembre de 1993 en la cual se ha señalado que *<< el acogimiento de un menor tiene una clara finalidad protectora de éste y se caracteriza por su provisionalidad y temporalidad: cuando el acogimiento es debido a una situación de desamparo forzoso por parte de sus padres, pero sin que éstos estén incurso en causa de privación de patria potestad, el acogimiento será temporal y no preadoptivo, de suerte que no se les puede privar a aquellos de mantener con el menor la correspondiente relación a través del adecuado régimen de visitas >>.*

III. Acogimiento especializado o profesionalizado.

En el acogimiento especializado o profesionalizado la figura del acogedor está constituida por miembros que forman el equipo responsable del plan de mejora: comparten información, asumen tareas de cierta especialización y colaboran activamente en el logro de los objetivos, impulsando la reinserción.

El art. 20.1 LOPJM en su segundo párrafo regula esta modalidad de acogimiento especializado *“El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se acuerde, revestirá las modalidades establecidas en el Código Civil y, en razón de la vinculación del menor con la familia acogedora, podrá tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena. El acogimiento en familia ajena podrá ser especializado, entendiendo por tal el que se*

desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar esta función respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente compensación económica, sin suponer en ningún caso una relación laboral.”. En cambio, el término profesionalizado es establecido cuando el acogimiento especializado¹⁰ implica una relación laboral del acogedor con la entidad pública. En resumen, la diferencia entre ambos es que si es profesional existe una relación laboral entre la administración y el acogedor. (41)

La compensación económica que debe de ser percibida por los acogedores se encontrará incorporada en el documento anexo que acompañará a la resolución en la que se formalice el acogimiento familiar. Esta clase de acogimiento se caracteriza por la figura de los acogedores, los cuales son plenos colaboradores de la administración en el plan de mejora del menor, es decir, forman parte del equipo técnico que se responsabiliza del caso. Por esta razón, pueden exigírseles tareas especializadas, colaborarán con la propia Entidad Pública en el seguimiento del menor y toma de decisiones, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos. Gracias a este tipo de acogimiento se verá facilitada la integración familiar de menores, ya que probablemente de otro modo hubieran sido derivados a un acogimiento residencial, como ocurre con ciertos menores que padecen enfermedades, deficiencias psíquicas, adolescentes conflictivos, grupos de hermanos, menores que hayan sufrido abusos sexuales o menores próximos a la mayoría de edad. (42)

Suelen tratarse de acogimientos a muy largo plazo, por lo que son más frecuentes los permanentes. La familia de acogida se obliga a hacer frente de todos los tratamientos y recursos que sean necesarios para el mejor desarrollo de los menores. Según la necesidad del menor será necesario un tipo de tratamiento diferente como puede ser la atención médica especializada, educativa, etc. En este tipo de acogimiento se dispone de un mayor apoyo por parte de los servicios de protección a la infancia y de servicio especializado. (43)

En nuestro ordenamiento jurídico ha sido definido como “*el encomendado a una persona o familia, especialmente cualificada, que acoge en su núcleo familiar a uno o*

¹⁰ Deberá de reunir los requisitos de cualificación, experiencia y formación específica.

varios menores y recibe una retribución por su labor y por los gastos de alimentación y educación del menor o menores acogidos”.

Los acogedores profesionales pueden tener a su cargo a más de un menor, siendo la Administración Pública la encargada de atribuirseles, la norma fijará el número máximo de menores que pueden estar bajo la tutela de un mismo acogedor profesional, además, también será la norma la que fije el régimen e importe de las cantidades a percibir y los requisitos de formación. De este modo, se aseguran de que los acogedores acreditan que tienen la debida preparación para desarrollar de forma eficaz, la responsabilidad que asumen y que disponen de los medios necesarios para garantizar la adecuada asistencia. En todos los casos, la administración debe prestar apoyo técnico y orientación a los acogedores.

La autora De Palma del Teso ha considerado que la condición de profesional deriva del carácter remunerado, la cual tendría la finalidad de garantizar que el menor o menores acogidos tengan cubiertas todas las necesidades materiales. También sostiene esta autora que el carácter profesional del acogimiento y la formación del acogedor es una garantía de que la familia no se apropiará del menor. (44)

En el presente gráfico se observa que el número de menores de edad sometidos a esta modalidad en España es escaso.

Gráfico 28. Menores de edad en acogimiento familiar por discapacidad



IV. Acogimiento familiar de urgencia.

El acogimiento familiar de urgencia se encuentra regulado en el art. 21.3 LO 1/1996, en el que se establece: *“Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis años. No se acordará el acogimiento residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la*

medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del menor. Esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más breve posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendrá una duración superior a tres meses.”.

Es un acogimiento temporal, ideado para menores de 6 años, se va a proteger al menor durante el tiempo en el que se analiza y evalúa su situación, tomando decisiones más adelante sobre qué medida de protección será la más idónea, esta modalidad posee una duración máxima de seis meses. Los menores deben de estar sujetos a revisiones periódicas, siendo cada 3 meses en menores de 3 años y cada 6 en mayores. (45)

El acogimiento familiar de urgencia tiene como especialidad la corta edad de los menores junto con la formación específica necesaria con la que se debe de preparar a las familias acogedoras y las obligaciones extraordinarias. Este tipo tiene como objetivo proteger al niño de forma inmediata en un contexto seguro, evitando la institucionalización proporcionándoles de manera rápida una familia de acogida, permitiéndole a la Entidad Pública disponer de unos meses para ejecutar un diagnóstico de la situación y sus posibilidades. Podría asemejarse esta modalidad a una postura en la cual son combinadas el acogimiento familiar, la urgencia de la medida que hubo de tomarse y el diagnóstico del futuro que habrá de configurar. (46)

En este tipo de acogimiento implica una imprevisibilidad del mismo y de la respuesta de las familias acogedoras, que deben de estar disponibles de forma inmediata siendo capaces de responder a la llegada del menor desamparado a su hogar, ejerciendo todas las funciones que garanticen su seguridad, cuando el menor llega al hogar donde será atendido los acogedores no dispondrán de información de la historia del niño y su familia biológica, además a esto se une que el estudio de la situación se lleva a cabo a lo largo del acogimiento, a través de este estudio se investigará la recuperabilidad de la familia biológica y los comportamientos del niño. En este tipo de modalidad es exigible a los acogedores que posean unas características concretas y reciban una formación determinada, para que puedan responder a la totalidad de las necesidades que presentan el acogimiento de urgencia.

V. Acogimiento familiar preadoptivo.

El acogimiento familiar preadoptivo es un paso previo de la adopción y su duración deberá de ser breve. Hay dos clases de acogimiento familiar preadoptivo¹¹:

1. Simultáneo a la propuesta de adopción: Es formulado por la entidad pública en el momento en el que sea elevada la propuesta de adopción de la menor informada por los servicios de atención al menor, y será formalizado ante la autoridad judicial. Como el fin de esta es la adopción, se exige para su constitución que los acogedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y prestado ante la entidad pública su consentimiento para la adopción y que el menor se encuentre en una situación jurídica adecuada para su adopción.
2. Anterior a la propuesta de adopción: Tiene lugar cuando la Entidad Pública considere que sea necesario establecer un periodo de adaptación del menor a la familia, antes de formular la proposición de adopción. El periodo de adaptación debe ser lo más breve posible y no podrá exceder el plazo de un año. (47)

Para impulsar la constitución del acogimiento familiar preadoptivo, al igual que la adopción se tendrán en cuenta una serie de requisitos:

- a) Preferencia del interés del menor
- b) Comprobación, a través de la evaluación e intervención con la familia de origen del menor, de la existencia de elementos de juicio suficientes para estimar que no es posible una modificación de las circunstancias familiares que permitan la reinserción. No será posible la reinserción cuando existiendo la posibilidad de reintegración, esta requiera un plazo de tiempo que ocasione un mayor deterioro psicosocial en el desarrollo evolutivo del menor¹².
- c) Preferencia del acogimiento familiar, solicitado por lo parientes del menor, al acogimiento preadoptivo.
- d) Integración satisfactoria del menor en el seno de la familia adoptiva, antes de la adopción en sí. Para ello, se exige una convivencia previa superior a cuatro meses en régimen de acogimiento familiar.

¹¹ Con la nueva regulación, tras la ley 26/ 2015, el acogimiento preadoptivo pasa a denominarse guarda con fines adoptivos y se integra como una fase más de adopción.

¹² El auto de la Audiencia Previa 6ª Sevilla de 28 de marzo de 1992 (RGD nº 599-90 p.10825), ha señalado que “*debiéndose efectuar todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento, vía previa de la adopción, con la conveniente reserva, resulta improcedente las visitas a los menores acogidos*”.

- e) Consentimiento del menor que tuviera ya doce años al acogimiento preadoptivo o adopción.
- f) Notificación a los padres o tutores de la decisión de promover el acogimiento preadoptivo, a fin de manifestar su consentimiento. (48)

De todo esto, es deducible que el acogimiento preadoptivo tendrá como finalidad que la adopción sea ejecutada de una forma más accesible, es decir, que contribuya al desenvolvimiento tanto para los adoptantes como para el adoptado. ene por finalidad conseguir una adopción más fácil en su desenvolvimiento tanto para adoptantes como adoptados. Atendiendo a AJPII 276/ 2020 de 4 de diciembre de 2020 se considera que los acogedores preadoptivos presentan un status reforzado, siendo a la vez guardadores del acogido con una expectativa de ser padres, es por ello que se les debe de dejar acceder a los procesos judiciales que puedan afectar al acogido, ya sea por la información que puedan aportar como por su expectativa de adopción.

5.3. EL ACOGIMIENTO INTERNACIONAL.

El acogimiento internacional es un mecanismo de protección a través del cual se permite la tutela y guarda ejercida por una Autoridad Pública y el posterior acogimiento del menor en un Estado distinto del que se encuentra. Es una materia que precisa de una regulación detallada y correcta, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, esto es debido a la especial importancia de los temas que regula, como es la presencia de un elemento internacional junto con la consideración que tienen los menores como sujetos vulnerables. Este traslado de menores de un estado a otro supone una mayor coordinación de las normas de Derecho Internacional Privado relativas a la responsabilidad parental y protección de menores, materias objeto de constante evolución. (49)

Las medidas de protección en el seno de la familia son prioritarias frente a la protección residencial debido al principio de subsidiariedad, a pesar de esto, hay circunstancias en las que el acogimiento de un menor en un estado miembro distinto al de origen del menor puede ser la solución que atienda mejor a los intereses y necesidades del niño, esta situación se encuentra regulada en el Reglamento Bruselas II-bis (art 56).

Para que este acogimiento pueda ser desarrollado de forma efectiva y correcta será necesario una cooperación entre las autoridades centrales en materia de responsabilidad parental, hay que destacar que esta modalidad en algunas legislaciones se encuentra

recogida como última instancia, únicamente se llevará a cabo cuando su situación se ha hecho inviable y se pone en peligro a si mismo o a otros. (50)

Realiza un papel muy importante la institución de los Servicios Sociales Internacionales (SSI), siendo esta una organización no gubernamental que tiene como misión crear una red internacional de profesionales y voluntarios, que compartan el compromiso de preservar, establecer y restablecer los vínculos entre familiares más allá de las fronteras, de esta forma desarrollan y mantienen una red internacional de trabajo social y servicios jurídicos capaz de dar respuesta a las necesidades de los niños y familias que requieren estos servicios. (51)

Hay que diferenciar si estamos ante un acogimiento internacional en familia extensa o en familia ajena. En el caso de que estemos ante un acogimiento en familia extensa, si los progenitores o tutores del menor que está bajo la protección reclaman la resolución de tener contacto con él estos deberán de contactar con la entidad que haya ejecutado la medida de protección (servicios sociales). En el caso del acogimiento familiar internacional en familia ajena, en España no hay una entidad pública como tal que lo tramite, para llevarlo a cabo, el interesado deberá de ponerse en contacto con alguna asociación que esté llevando esta modalidad concreta de acogimiento.

Se puede traer a colación al caso la situación de los Menores No Acompañados (MENAS), se puede definir como aquel niño extranjero menor de dieciocho años que sea nacional de un estado al que no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue al territorio español sin un adulto responsable de él, apreciándose riesgo de desprotección del menor. Estos menores pasan a la protección del menor de la Comunidad autónoma donde se encuentren, la cual se encargará de su seguridad y cuidado, así como su tutela. Si se quiere acoger a estos menores, las familias deberán de ponerse en contacto con la Comunidad Autónoma para iniciar el proceso y según la situación familiar y la del niño, los técnicos decidirán que acogida es más apropiada y beneficiosa para el menor y las familias. (52)

Según los últimos datos obtenidos en las estadísticas, el acogimiento familiar de extranjeros es de un 10%.

Gráfico 33. Acogimiento familiar por nacionalidad



6. LA CONSTITUCIÓN DE LA FIGURA DEL ACOGIMIENTO.

En primer lugar, es destacable que la competencia para legislar sobre el acogimiento se encuentra delegada en las CCAA, a pesar de ello, conviene destacar el art. 173 del C. c¹³ como precepto regulador de la materia a nivel estatal. No se exige especial capacidad para ser acogedor, pero es destacable que al necesitar su consentimiento este debe de tener capacidad de obrar suficiente.

La aplicación de las causas de inhabilitación que se encuentran reguladas en los arts. 243 y 245 del C.c pueden ser aplicadas por analogía a los acogedores, tal y como dispone el autor Vargas Cabrea, de esta forma se entiende que serán inhabilitados para el ejercicio del acogimiento aquellos que se encuentren privados o suspendidos de la patria potestad o guarda y remoción de la tutela fundamentado en incumplimientos de deberes tuitivos personales, así como los condenados penalmente a consecuencia de un delito que esté relacionado con los deberes (establecido además en el arts. 172 ter 1 párrafo 2º C. c).

Se exige que el acogedor tenga idoneidad para organizar la situación familiar, participando de forma plena en su cometido. El acogimiento va a suponer que se ejerciten gran cantidad de acciones y toma de decisiones profesionales, como es el examen de idoneidad de los acogedores, a través del cual se va a favorecer y garantizar el éxito de la medida protectora. (53)

En función de la modalidad de acogimiento en que nos encontraremos se captarán diferentes familias, previo a la ejecución de la medida de protección estas deberán de

¹³ Debido a mejoras jurídicas, el artículo 20 LOPJM se traslada al artículo 173 C.c, sobre la formalización del acogimiento y contenido del documento anexo.

ser informadas sobre ello y se las deberá de preparar para todas aquellas tareas a las cuales se deben de afrontar. Para valorar en que grado una familia es la mejor opción para hacer frente a las necesidades del menor, y, además, cuál será el más apropiado y ajustado al menor será necesario realizar un seguimiento cercano con el fin de valorar el desarrollo de las relaciones, esto es lo que se va a definir como la valoración de idoneidad. El informe de valoración de idoneidad es la culminación de todo el trabajo ejecutado a través de las entrevistas, cuestionarios, pruebas, e información obtenida de otras fuentes y visitas domiciliarias. El objetivo principal es manifestar en que grado, teniendo en cuenta las investigaciones realizadas, se considera a la persona con ánimo de ser acogedor apto para ello, reuniendo las capacidades necesarias que permitan responder adecuadamente de todas las necesidades que tiene el menor. En relación con las personas idóneas para ser acogedoras, es fundamental detallar para que tipo de acogimiento lo son, teniendo en cuenta la tipología o necesidades especiales.

Los criterios de valoración son establecidos en el art. 20.2 LOPJM de 1996 conforme la redacción de la Ley 26/ 2015, los cuales no habían sido aún recogidos por la ley estatal. Los criterios fijados son:

- 1.- La situación familiar de la familia de acogida.
- 2.- Aptitud educadora de la familia de acogida.
- 3.- La capacidad de la familia de acogida para atender correctamente las necesidades del menor.
- 4.- La congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su modalidad.
- 5.- La disposición para facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atención, y del plan de reintegración familiar si lo hubiera.
- 6.- Las posibilidades para propiciar la relación del menor con su familia de procedencia¹⁴.
- 7.- Cuando el tipo de acogimiento lo aconseje, la adecuación de la edad de los acogedores con la del menor, así como la relación previa entre ellos.

¹⁴ La norma detalla que el régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de encuentro familiar habilitados, cuando sea aconsejado por el interés superior del menor y el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogedora.

La valoración de idoneidad será llevada a cabo por dos profesionales, los cuales deberán de firmarlo, realizando un trabajo conjunto y consensuado acerca de los contenidos y la conclusión con independencia de que sea favorable o desfavorable.

El documento de formalización del acogimiento deberá de incluir los siguientes términos (54):

- a) Identidad de los acogedores
- b) Consentimientos necesarios
- c) Modalidad del acogimiento y duración prevista.
- d) Los derechos y deberes de cada parte, en particular: la periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor acogido, el sistema de cobertura por parte de la Entidad Pública o de otros responsables civiles de los daños que sufra el menor o de los que pueda causar a terceros y la asunción de los gastos de manutención, educación y atención sanitaria¹⁵.
- e) El contenido del seguimiento que va a ejecutar la entidad pública.
- f) La compensación económica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.¹⁶
- g) Señalar si los acogedores actúan con carácter profesionalizado o en un hogar funcional.
- h) Plazo de revisión de la medida.
- i) Informe de los servicios de atención a menores.

El documento que incluya los aspectos anteriores tendrá que mandarse al Ministerio Fiscal en conformidad con la función de superior vigilancia la cual es asignada al fiscal en virtud del art. 174.1 del C.c.

La legislación actual incluye el estatuto del acogedor familiar en el art. 15 de la ley 26/ 2015, dando cabida al art. 20 bis de la LOPJM de 1996, en el que se regulan los derechos y deberes de los acogedores. Los acogedores familiares tienen derecho a:

- a. Recibir la totalidad de la información imprescindible relativa a la naturaleza y efectos del acogimiento. Al igual que deben de recibir una preparación previa, un seguimiento y apoyo técnico en el tiempo de duración y finalización de la medida (art. 20 bis, 1 a).

¹⁵ Son obligaciones idénticas a las que corresponden a los titulares de la patria potestad, según el art. 154.1º. CC, sustituyendo el acogedor a los padres o tutores, en su caso y con la extensión más reducida de los deberes de éste.

¹⁶ Debiendo ser pactado en el caso de que proceda la forma de pago, periodicidad, el acreedor y el deudor.

- b. Ser escuchados por la Entidad Pública antes de que sean implantadas decisiones que conciernan al menor.
- c. Ser informado de todo lo que altere a la seguridad y protección del menor¹⁷.
- d. Ser parte en los procesos de oposición a las medidas de protección a la declaración de la situación de desamparo. También en los relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que se encuentre formalizada. Derecho a formular formalmente quejas o sugerencias a la Entidad Pública.
- e. Disponer de toda la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor.
- f. Ejercicio de la totalidad de los derechos inherentes a la guarda, ejecutados siempre respetando al menor.
- g. Colaborar con Entidad Pública en lo concerniente a los planes de actuación y seguimiento fijados al acogimiento. Obtener auxilio de la Entidad Pública en todo lo preciso.
- h. Recibir una compensación económica u otro tipo de ayuda cuando se haya estipulado.
- i. Facilitar al menor acogido las mismas condiciones de vida que a los hijos biológicos o adoptados que tenga la familia de acogida. Se les permite realizar viajes siempre con la previa autorización de la Entidad Pública.
- j. Relacionarse con la menor una vez finalizada la medida del acogimiento siempre que resulte en beneficio del menor.
- k. La protección de los datos personales respecto de la familia de origen.
- l. La familia acogedora tiene los mismos derechos que la Administración reconoce a todas las unidades familiares.

Por lo que se respecta a los deberes de los acogedores, cabe referirse a (55):

- a. Velar por el bienestar e interés del menor. Ejercitar los derechos inherentes a la patria potestad incumplidos por la familia de origen.
- b. Escuchar siempre al menor antes de tomar decisiones que puedan afectarlo¹⁸.

¹⁷ En concreto de: el plan individualizado de protección, las medidas de protección que se adopten respecto del menor concreto, el régimen de las revisiones periódicas, el expediente de protección en todo lo que resulte necesario para el ejercicio de sus funciones.

¹⁸ Se deberá de oír al menor cuando tenga el grado de madurez suficiente y siempre que sea mayor de 12 años, transmitiendo a la Entidad Pública las peticiones. Es la familia de acogida la que decide que peticiones del menor deben comunicarse a la Entidad Pública, lo que le deja margen de decisión,

- c. Asegurar la plena participación del menor en la vida familiar en un plano de igualdad.
- d. Informar a la Entidad Pública de cualquier hecho trascendental¹⁹ en relación con el menor
- e. Facilitar y respetar las relaciones con la familia de origen, dentro de las posibilidades de la familia acogedora, atendiendo al régimen de visitas establecido y a las posibilidades de reintegración familiar.
- f. Colaborar activamente con la Entidad Pública para facilitar el desarrollo del programa individualizado, seguimiento de la medida, atendiendo a las instrucciones dadas.
- g. Respetar la confidencialidad de los datos referentes a antecedentes personales y familiares del menor.
- h. Comunicar a la Entidad Pública cualquier modificación que se pueda producir en la situación familiar.
- i. Garantizar el derecho a la intimidad e identidad de los menores.
- j. Participar en las actividades formativas propuestas y colaborar en el tránsito de la medida de acogimiento familiar.
- k. Mismas obligaciones respecto del menor acogido que aquellos que la ley establece a los titulares de la patria potestad.

Si el acogimiento fuera ejercitado en un hogar funcional, el responsable de este será el acogedor, y en el caso, de ser un centro lo será el director.

6.1. FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ACOGIMIENTO.

I. La constitución administrativa.

La Entidad Pública tiene dos opciones para ejercer la guarda del menor, ya sea por medio de un acogimiento familiar o por medio de uno residencial. Será en la misma resolución administrativa en la que se tenga constancia el desamparo donde será acordada, aunque esta sea de forma provisional la medida del acogimiento. Para realizar esta constitución se requerirá de forma necesaria el consentimiento de los padres o del tutor, la intervención judicial se requerirá en última instancia, cuando sea inexistente la

asumiendo también la valoración de la madurez del menor para determinar aquello que accederá a la entidad y lo que no. De este modo, se otorga cierta autonomía para su ejercicio.

¹⁹ Por hecho trascendental entendemos que se refiere a todo aquello que afecte al menor a nivel educativo, social, familiar, etc.

voluntad espontánea de las personas responsables que estén a disposición de la guarda del menor, para que de este modo se ejecute la medida o cuando estos se opongan a ella²⁰. (56)

Por norma, el procedimiento de constitución deberá de adaptarse a una serie de formalidades extrajudiciales que son desempeñadas por la administración, las personas acogedoras además deberán de facilitar su consentimiento, remitiéndolo posteriormente al Ministerio Fiscal.

En nuestro ordenamiento jurídica las únicas pautas para la constitución del acogimiento se encuentran en el art. 173 del C. c y el art. 20 LOPJM, además, la disposición adicional tercera de la Ley 26/ 2015 habilita al Gobierno a promover junto con las CCAA el establecimiento de criterios comunes, con unos mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en aplicación a dicha ley.

II. La constitución judicial.

Tal y como previamente ha sido detallado en el apartado anterior, la constitución judicial tendrá lugar cuando en el momento que se notifica a los progenitores la resolución administrativa que contienen la medida de acogimiento estos se opongan rotundamente a la misma, mostrando su inconformidad.

Los progenitores que se encuentren disconformes deberán de acudir al procedimiento que se encuentra regulado en el art. 780 de la LEC, para impugnarla ante el juez con el fin de que delibere si ha sido efectuada ajustada a derecho. En nuestro país, tenemos una parte de la doctrina como son los autores Gozalez Pillado y Grande Seara, que opinaban que la constitución judicial se trataba de un procedimiento residual, debido a que solo se acudía ante el en dos supuestos delimitados como eran la falta de consentimiento de los

²⁰ El auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de enero de 1997 señalaba: “*la figura del acogimiento de menores que regulan los artículos 172 y siguientes del Código Civil, en sus aspectos sustantivos y artículos 1825 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus facetas procedimentales judiciales, no es, al contrario de lo que acaece con la adopción, de obligada, en cualquier caso, constitución judicial, al bastar, en principio, su formalización administrativa, con el consentimiento de la Entidad pública, así como el de las personas que reciban al menor y de este si fuera mayor de doce años; dicho requisito se hace extensivo igualmente a los padres que no estuviesen privados de la patria potestad, y solo en defecto de tal consentimiento o caso de oposición al acogimiento, es cuando se precisa, la intervención judicial para poder acordar, en su caso, tal instrumento de protección del menor, bajo la directriz del prioritario interés del mismo, conforme a los tramites de la Ley de Enjuiciamiento Civil*”.

padres o tutor y la oposición de la formalización de este²¹. El procedimiento judicial presenta una naturaleza constitutiva en el que el juez llevaba a cabo un control de legalidad y verificación de los requisitos legales del acogimiento, la justificación de la medida y su conveniencia para el menor. (57)

Hay ciertas situaciones especiales o singulares en las que tendrá lugar la constitución judicial, algunas de estas pueden tener lugar cuando haya una inexistencia en la conformidad de los padres tampoco en cuanto al régimen de visitas²² o que la propuesta de la Entidad padezca de algún defecto, sin que sea indicado de forma clara las relaciones del menor con su familia de origen²³.

Por ende, los padres que no estén privados de la patria potestad o suspendidos de su ejercicio (también será incluido el tutor en el caso que lo hubiere) y el menor de doce años con juicio suficiente deberán ser escuchados por el juez (la SSTEDH de 8 de julio de 2003 Sahin- Alemania y la de 11 octubre de 2016 entre Iglesias-España han determinado que los tribunales nacionales no están en la obligación de oír al niño siempre en un tribunal, deberá de depender de las circunstancias específicas del caso, teniendo en cuenta factores como la edad y la madurez, no debe ser entrevistado con más frecuencia de la necesaria, el proceso de oír al menor es un proceso complicado que puede provocar efectos traumáticos), la resolución de este será dictada en forma de auto y dentro del plazo de cinco días (la ley no expresa cuando comienzan a contar esos cinco días). Contra el auto que acuerde la constitución del acogimiento cabe recurso de apelación ante la AP en un solo efecto. (58)

7. EXTINCIÓN DE LA FIGURA DEL ACOGIMIENTO.

El art. 173.3 C.c, conforme la redacción establecida por la Ley 26/ 2015 establece que:
“Si surgieran problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quienes hubiere confiado la guarda en acogimiento familiar, aquél, el acogedor, el Ministerio Fiscal, los progenitores o tutor que no estuvieran privados de la patria

²¹ El artículo 1828.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (derogada) establece un tercer supuesto en el cual, puede tener lugar la constitución a través de un juez, este tendría lugar cuando no se haya podido conocer el domicilio o paradero de los padres o tutores, o si citados no comparecen.

²² La consulta de la fiscalía señala que en esos casos la Entidad Pública debe hacer figurar en su propuesta la periodicidad concreta de visitas que estima más adecuada en atención al interés del menor.

²³ La incorrección podrá subsanarse durante el propio trámite procesal requiriendo a tal fin a la Entidad, o en definitiva, podrá suplirse mediante la correspondiente decisión judicial en el auto de constitución del acogimiento sobre la regulación del ius visitandi.

potestad o de la tutela o cualquier persona interesada podrán solicitar a la Entidad Pública la remoción de la guarda”.

El acogimiento puede finalizar (59):

1º - Por resolución judicial: El acogimiento administrativo puede finalizar por decisión del juez, siempre que converjan las causas que fueron contempladas en el mismo acuerdo de constitución firmado entre las personas implicadas, también puede tener lugar cuando se produzca cualquier causa incluida en el precepto. El acogimiento judicial deberá ejecutarse por resolución del juez de forma obligatoria. Se puede extinguir la figura del acogimiento cuando el menor que sea mayor de doce años revoque el consentimiento (no tiene relevancia que el menor sea promotor del proceso de cesación) o cuando no haya sido concedido con anterioridad por considerarse innecesario al tener menos de tal edad en el momento de la formalización.

2º- Por decisión y voluntad de los acogedores, requiere una previa comunicación de la voluntad de estos a la Entidad Pública. Es la propia voluntad de los acogedores la que decide sobre el cese del acogimiento, ya que no hay ninguna posibilidad de que el acogimiento sea ejercitado coercitivamente, obligado por el Ente Público. Es destacable afirmar que lo que finaliza es la relación de acogida entre la familia acogedora y el menor, pero no finaliza la protección pública del menor, que será ejecutada de una manera distinta.

3º- A solicitud del tutor o de los padres que estén en posesión de la patria potestad y demanden su compañía. en este caso, la cesación debe involucrar el regreso del menor a la convivencia con sus padres o tutor, para asegurar esto es necesario que previamente se analicen de una forma muy minuciosa las circunstancias que envuelven al menor. El momento de la reinserción tendrá lugar cuando se haya comprobado una evolución positiva y suficiente para restablecer dicha convivencia, debiendo concurrir el propósito de desempeñar las responsabilidades parentales adecuadamente y que se verifique que el entorno no presenta más riesgos relevantes para el menor a través de un informe técnico. Posterior a su reinserción se debe de realizar un seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor. Es destacable señalar que en los casos en los que se han llevado a cabo un acogimiento familiar se debe de ponderar el tiempo transcurrido y la integración con la familia de acogida y su entorno, así como el desarrollo de vínculos afectivos con la misma. La desvinculación afectiva del menor con la familia natural,

junto con su progresiva inserción en la familia de acogida pueden resultar determinantes para denegar una pretensión de la guarda, al igual que rechazar el derecho que tienen los familiares de relacionarse con el menor, lo cual por otra parte resulta indispensable para el retorno del menor a la familia de origen²⁴. (60)

4º- Por decisión de la Entidad Pública que posea la tutela o guarda del menor, siempre que sea para amparar el interés del menor una vez escuchadas todas las partes, es decir, los acogedores, el menor, sus progenitores o tutor²⁵. Puede ser calificado como el supuesto de extinción básico y general, debido a que normalmente la entidad es la encargada de iniciar el acogimiento, lo que implicará que esta a su vez lo sea para finalizar dicha medida. Es apreciable una desjudicialización de este cese, establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 26/ 2015 la cual afirmo que *“los acogimientos constituidos judicialmente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley podrán cesar por resolución de la Entidad Pública sin necesidad de resolución judicial”*

5º- Por muerte o declaración de fallecimiento del acogedor o acogedores.

6º- Mayoría de edad del menor.

El expediente de cesación puede ser iniciado de varias formas ya sea por el Juez de oficio o a petición del menor (sin importar la edad del mismo), de su representante legal, padres que no estén privados o tengan suspendida la patria potestad, o tutor, de la

²⁴ SAP. De Soria de 13 de marzo de 1996, en la cual la madre de dos menores solicitó el cese del acogimiento y recuperación de su guarda y custodia fundando su petición en un cambio de las circunstancias personales que dieron lugar a la intervención de la Entidad Pública. El tribunal entiende que *“ A nadie se le oculta la situación de conflicto que les supondría a los niños el comenzar a convivir con su propia madre, de la que han perdido referencia -llevan mas de tres años con la familia de acogida- y con su actual compañero al que apenas conocen, de tal forma que cualquier cambio de la situación actual totalmente normalizada en los sentimientos de los menores comportara un serio riesgo de conmoción cuyas consecuencias no se atreven a aventurar los autores del informe. Por ello el cambio, es decir la modificación del sistema de guarda y custodia establecido debe hacerse con las máximas garantías ya que un fracaso en su nueva relación con la madre biológica sería completamente desestabilizador e irrecuperable para los menores, parece claro que la situación de la I. ha mejorado (...) del informe realizado no extraemos la máxima garantía a que hemos hecho referencia, por ello reiteramos que es necesario que quede patente en su total estabilidad emocional y afectiva que aseguren la asunción de un rol maternal con garantías”*. Por ello, la sala estimó no acceder, de momento, a la entrega de los menores a su madre biológico.

²⁵ STS de 20 de Julio de 2015 (Tol 5214768), en la que se declara que *“En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de cónyuges acogedores no cabe adoptar en la sentencia que recaiga, declarando tales situaciones, medidas definitivas respecto de menores acogidos, sujetos a la tutela administrativa del ente público, con suspensión de la patria potestad (...). Sino que su cese o su modificación debe solicitarse a la Entidad Pública que asumió la tutela administrativa y autorizó el acogimiento, ya que, no existe laguna legal por la que se deba acudir a aquellos procesos para resolver las incidencias derivadas del acogimiento”*

Entidad Pública, del Ministerio Fiscal o de los acogedores. Serán empleadas las mismas normas procedimentales que son aplicables a su constitución.

La carga de la prueba de la cesación de las situaciones que implicaron el inicio del acogimiento del menor corresponde al progenitor desposeído de la guarda. Contra el auto que acuerde la constitución del acogimiento cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial a un solo efecto.

8. LA INSTITUCIÓN DEL ACOGIMIENTO EN CANTABRIA.

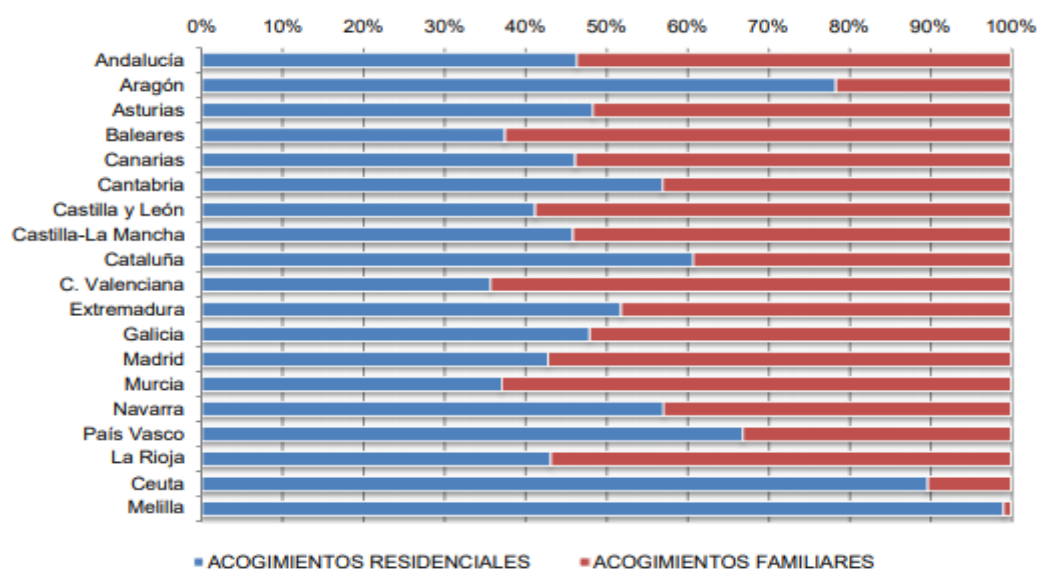
El art. 148.1. 20º CE atribuye a las Comunidades Autónomas la posibilidad de detentar competencias en materia de asistencia social, promulgando cada Comunidad Autónoma sus propias normas y reglamentos relativos a la protección del menor, regulando detalladamente la figura del acogimiento.

Aquellas normas que vayan en contra de la LO 8/ 2015 y Ley 26/ 2015 quedarán derogadas en virtud de las respectivas disposiciones derogatorias únicas.

Para participar en el programa regional de acogimiento familiar se debe contactar con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales o en la Dirección General de Política Social.

A través del gráfico podemos observar que el acogimiento residencial es la modalidad predominante en nuestra CCAA.

Gráfico 50. Medidas adoptadas por tipo de guarda - Totales a 31 de diciembre



En Cantabria la ley que regula la materia es la Ley 8/ 2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia. Concretamente, el tema del acogimiento se regula en el título IV, capítulo III, sección 4ª, subsección 3ª, los arts. 75 a 77²⁶.

²⁶ Artículo 75. Servicio de acogimiento familiar.

1. El servicio de acogimiento familiar es una prestación del Sistema Público de Servicios Sociales que consiste en encomendar la custodia y atención de una persona menor a una persona o familia que asume las obligaciones señaladas en el artículo 173 del Código Civil.
2. El acogimiento familiar procura la atención integral de la persona menor mediante su integración en un núcleo familiar estable, bien sea con carácter temporal, permanente o como paso previo a la adopción.
3. La persona o personas que la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria seleccione para acoger a la persona menor ejercerán las funciones propias de la guarda.
4. Las Administraciones Públicas y las instituciones colaboradoras promoverán campañas de sensibilización social y programas de búsqueda de personas y familias acogedoras.
5. Los Servicios Sociales de Atención Especializada, en colaboración con los de Atención Primaria, dispondrán de un servicio de acogimiento familiar que incluya:
 - a) Captación, formación y selección de personas y familias acogedoras.
 - b) Apoyo a personas y familias acogedoras.
 - c) Apoyo al acogimiento en familia extensa.
6. En la selección de personas o familias acogedoras, primará siempre el interés superior de la persona menor, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
 - a) La aptitud educadora.
 - b) La situación familiar.
 - c) La relación previa con la persona menor, si existiera.
 - d) La capacidad de relación.
 - e) La edad.
 - f) Cualquier otro factor que se estime necesario para la adecuada selección de las personas acogedoras.
7. Los acogimientos que no tengan como finalidad la adopción de la persona menor darán preferencia a familiares o personas acogedoras de hecho siempre que demuestren suficiente capacidad para su atención o cuidado.
8. Las personas acogedoras tienen el derecho y el deber de colaborar en las actuaciones de protección recogidas en el plan de atención individual, dirigidas al desarrollo integral la persona menor.
9. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria prestará a las personas acogedoras los apoyos formativos y técnicos que precisen para la consecución de los objetivos previstos en el plan de atención individual, en función de las necesidades de la persona menor y de las circunstancias del acogimiento.
10. Las personas acogedoras que no hayan tenido experiencia previa en materia de acogimiento familiar deberán recibir formación específica.

Artículo 76. Formalización del acogimiento familiar.

1. El acogimiento se formalizará por escrito, debiendo constar el consentimiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de la parte acogedora, de la persona menor, si tuviera doce años cumplidos, y de quienes ostenten la patria potestad o la tutela si fueran conocidos y no estuviesen privados o suspendidos de estas potestades, salvo que se tratase de un acogimiento familiar provisional regulado en el artículo 173.3 del Código Civil.
2. El documento de formalización del acogimiento familiar contendrá los extremos establecidos en el Código Civil.

Artículo 77. Servicio de acogimiento residencial.

1. El servicio de acogimiento residencial es una prestación garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales en los términos recogidos en el artículo 27 de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo.
2. El acogimiento residencial consiste en facilitar a aquellas personas menores que no pueden permanecer en sus hogares, y cuya guarda haya asumido la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, un lugar de residencia y convivencia que cumpla con el cometido de una adecuada satisfacción de las necesidades de protección, educación y desarrollo.
3. Este servicio tiene como finalidad contribuir a la creación de las condiciones que garantizan la adecuada cobertura de las necesidades físicas, psíquicas, emocionales y sociales de la persona menor y el

9. CONCLUSIÓN.

El menor es un sujeto de derecho vulnerable que requiere del apoyo de su familia al carecer de capacidad de obrar. Desgraciadamente su desprotección es una escena repetida en todos los países del mundo desde hace muchos años atrás, siempre ha existido, a medida que ha avanzado la sociedad se ha ido desarrollando, procediendo a

efectivo ejercicio de sus derechos, favoreciendo su integración familiar y social y permitiendo un desarrollo adecuado, todo ello en el marco del plan de atención individual.

4. La adopción de la medida de acogimiento residencial corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o a la autoridad judicial cuando, atendiendo al interés superior de la persona menor, no resulte posible o aconsejable el acogimiento familiar, y procurando, en todo caso, que sea de carácter transitorio.

5. El servicio de acogimiento residencial incluirá la atención a personas menores que presentan graves problemas de socialización, inadaptación o desajuste social, en recursos de atención especiales en los que, en el marco de la acción protectora, se llevará a cabo una intervención educativa de orientación preventiva, intensiva, inmediata y de corta duración, en un ambiente estructurado y de seguridad. Para ello, cuando las personas menores presenten problemas que supongan un riesgo evidente de daños o de perjuicios graves a sí mismas o a terceras personas, podrán ser ingresadas dando cuenta al Ministerio Fiscal en el plazo más breve posible, todo ello sin perjuicio de poder instar, cuando proceda y de acuerdo con lo previsto en el Código Civil, el internamiento judicialmente autorizado en establecimiento de salud mental o en centro de educación o formación especial.

6. Los Servicios Sociales de Atención Especializada dispondrán de un servicio de acogimiento residencial que incluya recursos de:

- a) Primera acogida.
- b) Protección.
- c) Autonomía y preparación para la autonomía.
- d) Socialización y régimen especial.

7. Todo acogimiento de una persona menor se comunicará de forma inmediata por escrito, al padre o madre si no están privados de patria potestad, a las personas que ejerzan la tutela o guarda y al Ministerio Fiscal.

8. Corresponde a quien ejerza la dirección del centro de acogimiento ejercer la guarda de la persona menor acogida, con la garantía de sus derechos y mediante el correcto desempeño de las funciones inherentes a dicha guarda.

9. El acogimiento se realizará en régimen abierto, donde las únicas limitaciones de entrada y salida están marcadas por las necesidades educativas y de protección. Se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención necesarios que se establezcan reglamentariamente para evitar y reprimir actos de violencia o intimidación o lesiones de las personas y daños en las instalaciones. La aplicación de los medios de contención durará sólo el tiempo indispensable.

10. Los centros deberán ajustarse, en cuanto a los requisitos materiales, funcionales y de organización, a las necesidades de atención personalizada que requieren las personas menores, de modo que se favorezca su desarrollo social y afectivo.

11. Sin perjuicio de la vigilancia que el Ministerio Fiscal deba ejercer sobre todos los centros que acogen a personas menores, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria la autorización, acreditación, inspección y supervisión de los centros de acogimiento residencial de la Comunidad Autónoma, que se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, y en su normativa de desarrollo. La inspección y supervisión de dichos centros y servicios deberá realizarse semestralmente y siempre que así lo exijan las circunstancias.

12. Los centros en que se desarrolle el servicio de acogimiento residencial no podrán tener más de veinticinco plazas, con excepción de los centros de primera acogida.

13. Todos los centros de acogimiento residencial dispondrán de un proyecto socioeducativo de carácter general, independiente del individualizado para cada persona menor, así como de un reglamento de régimen interior, cuyos contenidos serán objeto de desarrollo reglamentario.

14. Cada centro residencial dispondrá de su propio registro en el que constarán las personas menores acogidas.

la creación de diversos instrumentos de protección como es el del acogimiento. La protección del menor es una materia muy desarrollada tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional.

Las situaciones de desprotección en menores pueden ser aliviadas de manera gradual, con más o menos intensidad, en función de si estamos ante una situación de riesgo o ante una de desamparo. La situación de riesgo hace referencia a circunstancias que perjudican al menor de una forma menos intensa, permitiendo de este modo medidas más relajadas, destinadas a trabajar con la propia familia de origen del menor para de este modo conseguir poner fin a las causas que la producen. En cambio, cuando estamos ante una situación de desamparo el grado de desprotección del niño es más intenso, lo que requiere medidas de actuación más intensas por parte de la administración, llegando incluso en muchos casos a la separación del menor de la familia de origen. Como principio rector está el interés del menor, todas las medidas que sean adoptadas pivotarán entorno este aspecto, la Administración Pública encargada de ejecutar las medidas de protección tendrá en la mayoría de los casos el objetivo de reinserción del menor en el hogar familiar de origen, se busca poner fin a las causas que daban lugar a la desprotección del menor, en algunos casos esto no será posible, pero el mayor objetivo a conseguir sería este.

Respecto la evolución de esta medida de protección, considero que ha evolucionado de una forma adecuada, la regulación que la misma presenta es buena abarcando todos los campos de protección que son necesarios para que los menores desamparados puedan desarrollarse.

El acogimiento se puede decir que es una medida excepcional llevada a cabo el tiempo imprescindible, el alejamiento del menor de la familia de origen se deberá de hacer cuando no haya más opciones viables, en última instancia, cuando la presencia del menor en la familia de origen le provoque graves perjuicios. Previamente a esto, los Poderes Públicos ejecutarán todas las medidas que sean necesarias para intentar evitar esta situación.

La medida del acogimiento presenta diferentes modalidades, lo cual permitirá que se adapten a cada caso concreto teniendo en cuenta las necesidades individuales del menor desprotegido, la preferible por la legislación es el acogimiento familiar, pero

investigando a través de estadísticas se ha concluido que en España hay más acogimientos residenciales que familiares.

El acogimiento residencial implica un internamiento en un centro de acogida, hay en ciertos casos en los cuales será la medida más adecuada, pero en mi opinión, considero que esta medida en parte puede ser perjudicial en el menor, ya que el vivir y desarrollarse en un centro de acogida implica ciertas carencias que en el acogimiento familiar no ocurrirían, debido a que este se asemeja más a la vida que la menor tenía previa a la desprotección.

El acogimiento familiar es aquel que se desarrolla en el seno de una familia, lo cual permite la plena participación del menor, asemejándolo a la situación habitual que debería de tener todo menor, la familia de acogida debe de tratarlo como de si su propio hijo se tratara. Este concepto de acogimiento familiar es amplio, dentro del mismo se establecen otro tipo de clases, encontramos el acogimiento familiar en familia extensa, en el cual el acogedor es familiar de él y en familia ajena, en el cual el menor no tiene ningún vínculo familiar con el menor. Personalmente, considero que el acogimiento en familia extensa sería el que menos perjuicios podría causar al menor. Además, de estas clases o modalidades tenemos el acogimiento familiar permanente, que tiene lugar cuando se prevé una duración a largo plazo de la medida de protección, en contraposición tendríamos el acogimiento familiar temporal, pensado para situaciones transitorias. En ciertos casos, hay menores que presentan una serie de problemas que van a requerir que los acogedores tengan que implicarse de una forma más intensa y a su vez, requieran de una formación adecuada, este es el llamado acogimiento especializado o profesionalizado (existe una relación laboral), hay veces que el acogimiento presenta un carácter retribuido, esto puede ser beneficioso y ventajoso, ya que hay personas a las que les encantaría ostentar la condición de acogedores y poder ayudar a todos los menores desamparados que pudieran pero que por carencias económicas en su vida o insuficiencia de recursos para mantener tanto a su propia familia como al menor desprotegido, no se animan a formar parte de este bonito proyecto. Además, hay menores que van a necesitar que se les dispensen ciertos cuidados o tratamientos de elevado coste (como puede ser una persona discapacitada, con una deficiencia intelectual, etc), los cuales podrían verse aún más desprotegidos sin que ninguna familia los quisiera acoger debido al elevado coste que ello supondría. El acogimiento familiar de urgencia se establece para menores de 6 años durante el tiempo

en el que se analiza y acuerda una medida de protección idónea. Es regulado también el acogimiento preadoptivo, que podría considerarse una especie de trámite previo a la adopción.

Mención especial cabe hacer al acogimiento internacional, estimo que esta modalidad está progresando de la mano del progreso social, cada vez son más personas los que realizan este tipo de acogimiento, este acogimiento requiere una coordinación entre la legislación interna e internacional, por lo cual, podemos deducir que su aplicación va a entrañar unos requisitos más exigentes.

A la hora de constituir el acogimiento, se debe de tener en cuenta una serie de criterios que serán diferentes en función del tipo de acogida que nos encontremos. Puede tratarse de una constitución administrativa a través de resolución administrativa, es la más usual o una constitución judicial, que puede tratarse como subsidiaria a la anterior cuando los progenitores se oponen a la medida.

El acogimiento se extingue cuando se pone fin a la situación que motivo su creación, puede terminar por resolución judicial, por decisión de los acogedores, de los progenitores, de la Entidad Pública, por mayoría de edad o por muerte. La reinserción del menor en la familia de origen debe valorar de forma minuciosa todas las circunstancias que envuelven al menor, debiendo ponderarse además de la evolución positiva del menor, el tiempo transcurrido y la integración en la familia de acogida, al igual que el vínculo creado entre ellos.

Para finalizar, quiero destacar que las CCAA tienen cierto poder normativo en la materia de protección de menores, la normativa estatal es complementada por la autonómica, en Cantabria la materia es complementada por la Ley 8/ 2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y adolescencia.

BIBLIOGRAFÍA Y CITACIONES.

- (1): SAP 927/ 2020 Albacete de 30 de diciembre de 2020 N° Recurso: 246/ 2019
- (2): LUIS ZARRALUQUI SÁNCHEZ EZNARRIAGA, GPS Derecho de familia, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413556123
- (3): STS 170/ 2016 de 17 de marzo de 2016 N° Recurso: 2517/ 2014 y STS 540/ 2015 de 15 de octubre de 2015 N° Recurso: 1161/ 2014
- (4): STS 3440/ 2015 de 14 de Julio de 2015 N° Recurso: 2398/2013
- (5) STS 444/ 2015 de 16 de septiembre de 2014 N° Recurso: 14/ 2014
- (6): ATS 4270/2021 de 7 de abril de 2021 N° Recurso: 3048/ 2020
- (7) MARIA DEL CARMEN GARCÍA GARNICA, La guarda como medida de protección de menores y personas con discapacidad tras su reforma por la ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Granada.
- (8) (9): CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, El sistema de protección a la infancia y la adolescencia, Tirant lo Blanch, 2017, ISBN 139788491439295.
- (10): MARTA SÁNCHEZ ALONSO, CARLOS BELTRÁ CABELLO, MARÍA LINACERO DE LA FUENTE, Tratado de derecho de familia, aspectos sustantivos 2ª edición, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413360355.
- (11): STS 3162/2015 de 9 de Julio de 2015 N° Recurso: 1562/2014
- (12): STS 5817/2009 de 31 de julio de 2009 N° Recurso: 247/2007
- (13): SAP 980/ 2002 Burgos de 4 de Julio de 2002. N° Recurso: 313/ 2001.
- (14): MARTA SÁNCHEZ ALONSO, CARLOS BELTRÁ CABELLO, MARÍA LINACERO DE LA FUENTE, Tratado de derecho de familia, aspectos sustantivos 2ª edición, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413360355.
- (15): MARÍA TERES MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, Mª JOSÉ REYES LÓPEZ, PEDRO CHAPARRO MATAMORIOS, Mª LISA ATIENZA NAVARRO, JOSEFINA ALVENTOSA DEL RÍO, SALVADOR CARRIÓN OLMOS, JOSÉ RAMÓN DE VERDA Y BEAMONTE, ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ, ADELA SERRA RODRÍGUEZ, Derecho Civil IV. Derecho de familia 3ª Edición 2020, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413558851
- (16): Mª JOSEFA DE LA PRESENTACIÓN BOCCIO SERRANO, El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de protección, Tirant lo Blanch, 2017, ISBN 139788491437543.

- (17): JORGE F. DEL VALLE, AMAIA BRAVO Y MÓNICA LÓPEZ, El acogimiento familiar en España: Implantación y retos actuales. Universidad de Oviedo, Papeles del Psicólogo, 2009, Vol 30 (I). pp 33-41.
- (18): ANA POYATOS GARCÍA, Historia y evolución del acogimiento familiar de menores y el contexto de la Comunidad Valenciana
- (19): JORGE F. DEL VALLE, AMAIA BRAVO Y MÓNICA LÓPEZ, El acogimiento familiar en España: Implantación y retos actuales. Universidad de Oviedo, Papeles del Psicólogo, 2009, Vol 30 (I). pp 33-41.
- (20): ANA POYATOS GARCÍA, Historia y evolución del acogimiento familiar de menores y el contexto de la Comunidad Valenciana
- (21): ENCARNACIÓN ABAD ARENAS, Revisión del acogimiento a la luz de las modificaciones legislativas en materia de protección del interés superior del menor en España. Revista de Derecho Privado, ISSN: 0123-4366, E-ISSN: 2346-2442, N° 40, 2021, 173-200.
- (22): ANA ROSSER LIMIÑANA. “Marco legislativo del acogimiento familiar”. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. N. 6 (oct. 1998). ISSN 1133-0473, pp. 259-267.
- (23): ANA POYATOS GARCÍA, Historia y evolución del acogimiento familiar de menores y el contexto de la Comunidad Valenciana
- (24): LETICIA GARCIA VILLALUENGA. El acogimiento familiar como recurso de protección de menores. Cuaderno de Trabajo Social nº4- 5 (1991-1992). Págs 89 a 103. Ed. Universidad Complutense. Madrid 1993.
- (25): MARIA DEL CARMEN GARCIA GARNICA, La guarda como medida de protección de menores y personas con discapacidad tras su reforma por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Catedrática de Derecho Civil Universidad de Granada.
- (26): STSJ Navarra 385/ 2020 de 10 de diciembre de 2020 N° Recurso: 12/2020.
- (27): MARTA SÁNCHEZ ALONSO, CARLOS BELTRÁ CABELLO, MARÍA LINACERO DE LA FUENTE, Tratado de derecho de familia, aspectos sustantivos 2ª edición, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413360355
- (28): CESAR HORNERO MÉNDEZ, ÁNGEL MANUEL LÓPEZ Y LÓPEZ, FRANCISCO INFANTE RUÍZ, FRANCISCO OLIVA BLÁZQUEZ, LEONOR AGUILAR RUÍZ, EUGENIO PIZARRO MORENO, REYES SÁNCHEZ

LERÍA, M^a ROSARIO VALPUESTA FÉRNANDEZ, MARÍA SERRANO FERNANDEZ, JUAN PABLO PÉRRER VELÁZQUEZ, LUCIA VÁZQUEZ-PASTOR JIMENEZ, LAURA LÓPEZ DE LA CRUZ, Derecho de Familia 3^a Edición, Tirant lo Blanch, 2021, ISBN 139788413786445

- (29): MARIA DEL CARMEN GARCÍA GARNICA, La guarda como medida de protección de menores y personas con discapacidad tras su reforma por la ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Granada.
- (30): MARTA SÁNCHEZ ALONSO, CARLOS BELTRÁ CABELLO, MARÍA LINACERO DE LA FUENTE, Tratado de derecho de familia, aspectos sustantivos 2^a edición, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413360355
- (31): CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, El sistema de protección a la infancia y la adolescencia, Tirant lo Blanch, 2017, ISBN 139788491439295.
- (32): STSJ Navarra 385/ 2020 de 10 de diciembre de 2020 N^o Recurso: 12/2020.
- (33) CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, El sistema de protección a la infancia y la adolescencia, Tirant lo Blanch, 2017, ISBN 139788491439295.
- (34): ANA ROSSER LIMAÑA, Evolución de los acogimientos familiares. Propuesta de actuaciones para la prevención de sus dificultades. Anales de Psicología, Vol 27, n^o 3, octubre 2011.
- (35): LUIS ZARRALUQUI SÁNCHEZ EZNARRIAGA, GPS Derecho de familia, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413556123.
- (36): PEREIRO, P.: “El acogimiento familiar”, en Los sistemas de protección de la infancia y sus retos, XVIII Cursos de Verano de Donostia-San Sebastián 2009.
- (37): ENCARNACION ABAD ARENAS, El acogedor y guardador hacia una refundición de funciones de acogimiento temporal. Estudios institucionales, VOL. V, N^o 9 (págs. 125-172) ISSN: 2386-8694. Profesora Doctora UNED
- (38): LUIS ZARRALUQUI SÁNCHEZ EZNARRIAGA, GPS Derecho de familia, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413556123.
- (39): M^a JOSEFA DE LA PRESENTACIÓN BOCCIO SERRANO, El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de protección, Tirant lo Blanch, 2017, ISBN 139788491437543.
- (40): MARTA BURGUET ARFELIZ, M^a ROSA BXARRAIS ESTRADA, ALICIA ACEITUNO LARA, M^a CARMEN BELLVER MORENO, PIEDAD

M^a SAHUQUILLO MATEO, CARMEN CAMPOS APARICIO, M^a CARMEN AGUILAR RAMOS, FLOR HOYOS ALARTE, M^a DEL MAR LORENZO MOLEDO, PAZ CÁNOVAS LEONHARDT, ESTHER CISCAR CUÑAT, CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VÁZQUEZ, LAURA VILLAESCUSA MARTÍNEZ, BELÉN ZAYAS LATORRE, AMPARO PÉREZ CARBONELL, CONCEPCIÓN AROCA MONTOLÍO, Familias y menores, retos y propuestas pedagógicas, Tirant lo Blanch, 2014, ISBN 139788416062621.

- (41): JOSE JAVIER NAVARRO-PEREZ, Trabajo social con menores: el contexto de la infancia adolescencia y juventud, Tirant lo Blanch, 2019, ISBN 139788413139302.
- (42): M^a FELIX RIVAS ANTÓN, Notas sobre la naturaleza contractual del acogimiento familiar retribuido. Profesora asociada del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de Valladolid.
- (43): AMAIA BRAVO Y JORGE F. DEL VALLE. Crisis y revisión del acogimiento residencial. Su papel en la protección infantil. Papeles del psicólogo, 2009, Vol 30 (1).
- (44): ENCARNACION ABAD ARENAS, El acogedor y guardador hacia una refundición de funciones de acogimiento temporal. Estudios institucionales, VOL. V, Nº 9 (págs. 125-172) ISSN: 2386-8694. Profesora Doctora UNED.
- (45): CARMEN ROCÍO FERNÁNDEZ DÍAZ, CARLOS VILLAGRASA ALCAIDE, DIEGO JOSÉ VERA JURADO, ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ, LUZ MARIA DURAN MORENO, EDSON MANFREDO NOLASCO ABREGO, MÓNICA REGINA BRAN MEJÍA, ISAAC RAVETLLAT BALLESTÉ, ÁLVARO BURGOS MATA, MARIA JOSÉ BENÍTEZ JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS DÍEZ ROPOLLÉS, MIGUEL ÁNGEL CANO, JOSÉ MANUEL MENIN CAPELLÍN, BLANCA SILLERO CROVETTO, M^a ANGELES FERNÁNDEZ GÓMEZ, ELISA GARCIA ESPAÑA, AMÍLCAR IVÁN VALLADARES CORRALES, ROSA MARGARITA ZAMBRANO PEREZ,, M^a JOSE AMESTOR JURADO, PATRICIA AZUCENA MEJÍA SAN MARTÍN, DIANA MANUELA MEDINA MEJÍA, MARÍA DE LAS OLAS PALMA GARCÍA, KAMEL TARICK JOSÉ CASTRO, YURY DEYANIRA ZAPEDA ORDÓÑEZ, ANA PAMELA MONTES OBANDO, NOHEMI LIZZETH VINDEL VINDEL, ANDREA AGRELO, YENSY MARÍA BARRIENTOS FONSECA, SULMA

- MILADI PÉZ GARCÍA, Protección a la infancia y justicia juvenil. Especial referencia a Honduras, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413365633.
- (46): M^a FERNANDA MORETÓN SANZ, CARLOS VILLAGRASA ALCAIDE, ELSA SABATER BAYLE, FRANCISCA RAMÓN FERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS DE BARTOLOMÉ CENZANO, MARIA PILAR RIVAS VALLEJO, JORDI DELGADO CASTRO, CRISTINA GUILARTE MARTÍN-CALERO, J. DANIEL OLIVA MARTÍNEZ, ISAAC RAVETLLAT BALLESTÉ, ENCARNACION ABAD ARENAS, SONIA MATÍN ALBÁ, VICENTE CABEDO MALLOL, Comentarios sobre las leyes de reforma del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, Tirant lo Blanch, 2016, ISBN 139788491196419.
 - (47): AJPII 276/ 2020 de 4 de diciembre de 2020 N° Recurso: 657/ 2020
 - (48): VICENT LÓPEZ, CRISTINA. Notas sobre el acogimiento preadoptivo en la ley española 1/ 1996, del 15 de enero, de protección jurídica del menor. El derecho de familia y los nuevos paradigmas, 1998, vol.2, páginas 521-530.
 - (49): A. BORRAS. La evolución de la protección del niño en el Derecho internacional privado desde el Convenio de Nueva York de 1989.
F. ALDECOA, J. FORNER (Dir.), E. GÓNZALEZ Y N. GÓNZALEZ (coords) Idecoa, La protección de los niños en el Derecho internacional y en las relaciones internacionales. Marcial Pons, Madrid 2010.
 - (50): SALOMÉ ADROHER BIOSCA. Estancias temporales de menores extranjeros en España. Régimen jurídico vigente y desafíos del futuro. Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2019), Vol. 11, N°1, pp. 51-62 ISSN 1989-4570 – www.uc3m.es/cdt -DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4613> Profesora propia ordinaria de Derecho Internacional Privado Universidad Pontificia de Comillas.
 - (51): CRUZ ROJA, SERVICIO MULTICANAL SER ACOGEDORA, Acogimiento familiar internacional. <https://www.cruzroja.es> › principal › documents.
 - (52): COLLANTES, Niños, extranjeros y solos en España: cuando la desprotección se multiplica, UNICEF Blog.
 - (53): AJPII 276/ 2020 de 4 de diciembre de 2020 N° Recurso: 657/ 2020

- (54): MARTA SÁNCHEZ ALONSO, CARLOS BELTRÁ CABELLO, MARÍA LINACERO DE LA FUENTE, Tratado de derecho de familia, aspectos sustantivos 2ª edición, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413360355.
- (55): COMUNIDAD DE MADRID, Estatuto del guardador en el acogimiento familiar, orientaciones para el ejercicio del acogimiento familiar.
- (56): MARTA SÁNCHEZ ALONSO, CARLOS BELTRÁ CABELLO, MARÍA LINACERO DE LA FUENTE, Tratado de derecho de familia, aspectos sustantivos 2ª edición, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413360355.
- (57): GONZÁLEZ PILLADO/GRANDE SEARA: “Aspectos procesales civiles de la protección del menor”, ISBN-10 : 848456763X
- (58): MARTA SÁNCHEZ ALONSO, CARLOS BELTRÁ CABELLO, MARÍA LINACERO DE LA FUENTE, Tratado de derecho de familia, aspectos sustantivos 2ª edición, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413360355.
- (59): LUIS ZARRALUQUI SÁNCHEZ EZNARRIAGA, GPS Derecho de familia, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN 139788413556123
- (60): STS 315/ 2014 de 6 de junio de 2014 N° Recurso: 718/2012
STS 3440/ 2015 de 14 de Julio de 2015 N° Recurso: 2398/2013
STS 3162/2015 de 9 de Julio de 2015 N° Recurso: 1562/2014
STS 170/ 2016 de 17 de marzo de 2016 N° Recurso: 2517/ 2014
SAP Jaén 1477/ 2020 de 17 de diciembre de 2020 N° Recurso: 1116

INSTRUMENTOS LEGALES

- Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia, Boletín número 22, Datos 2019.
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/BOLETIN_22_fi_nal.pdf
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. BOE-A-1889-4763.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. «BOE» núm. 15, de 17 de enero de 1996. Referencia: BOE-A-1996-1069.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. «BOE» núm. 7, de 08 de enero de 2000. Referencia: BOE-A-2000-323.

- Constitución Española, «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.
Referencia: BOE-A-1978-31229.
- Declaración Universal de Derechos Humanos. Naciones Unidas.
- Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. BOE-A-1990-31312.
- Convención sobre los Derechos del Niño. 20 de noviembre de 1989.
<https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>
- Instrumento de ratificación de 9 de mayo de 1984 del Convenio Europeo relativo al reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia, hecho en Luxemburgo el 20 de mayo de 1980. «BOE» núm. 210, de 1 de septiembre de 1984, páginas 25291 a 25295 (5 págs.) BOE-A-1984-19540.
- Instrumento de Ratificación del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. «BOE» núm. 202, de 24 de agosto de 1987, páginas 26099 a 26105 (7 págs.). BOE-A-1987-19691.
- Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia. «BOE» núm. 19, de 22 de enero de 2011, páginas 6872 a 6930 (59 págs.). BOE-A-2011-1141.
- Todas las estadísticas han sido recopiladas del Observatorio de la Infancia, reflejadas a través del Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia número 22, actualizado el 20 de diciembre de 2020 en su web.